



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA



TESIS

**“La valoración probatoria de las declaraciones previas del imputado
frente al derecho a guardar silencio en juicio oral”**

PRESENTADO POR
Bach: Edquen Gavidia, Isidro Melchor

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO

ASESOR
Dr: Vargas Rodriguez, Cesar

LAMBAYEQUE, 2019

Tesis denominada “La valoración probatoria de las declaraciones previas del imputado frente al derecho a guardar silencio en juicio oral”, presentada para optar el TÍTULO DE ABOGADO, por:

Bach. Edquen Gavidia, Isidro Melchor

Autor

Abog. Vargas Rodriguez, Cesar

Asesor

Aprobada por:

Abog. Martínez Oblitas, Carlos Manuel

Presidente

Dr. Mondoñedo Valle, Amador Nicolás

Secretario

Dr. Falla Lamadrid, Luis Humberto

Vocal

DEDICATORIA

El presente trabajo de tesis está dedicado, en primer lugar, a ti mi Dios por bendecirme para llegar hasta donde he llegado y hacer realidad este sueño anhelado; a mis padres Segundo Melchor y Doraliza Gavidia, pilares fundamentales en mi vida. Sin ellos, jamás hubiese conseguido lo que ahora soy; su tenacidad y su lucha insaciable han hecho de ellos el gran ejemplo a seguir y destacar, no solo para mi sino también para mis hermanos y familia en general. También dedico este trabajo a mi primo hermano quien en vida fue Javier Coronado Edquen, ángel guardián que siempre me guía por la senda del futuro.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por bendecirme la vida, por guiarme a lo largo de mi existencia, ser el apoyo y fortaleza en aquellos momentos de dificultad y de debilidad. Gracias a mis padres: Segundo Melchor y Doraliza Gavidia, por ser los principales promotores de mis sueños, por confiar y creer en mis expectativas, por los consejos, valores y principios que me han inculcado.

Asimismo agradecer a mis docentes de mi alma mater Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, por haber compartido sus conocimientos a lo largo de la preparación de mi profesión.

INDICE

DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTO	iii
INDICE	iv
RESUMEN	viii
ABSTRACT.....	ix
INTRODUCCIÓN	10
CAPITULO I.....	13
ASPECTOS METODÓLOGICOS.....	13
1.1. Realidad Problemática.....	13
1.1.1. Planteamiento del Problema	13
1.1.2. Formulación del Problema.....	18
1.2. Justificación e Importancia del Estudio	18
1.2.1. Justificación del Estudio	18
1.2.2. Importancia del Estudio	19
1.3. Objetivos.....	20
1.3.1. Objetivo General.....	20
1.3.2. Objetivos Específicos	20
1.4. Hipótesis.....	20
1.5. Variables	21
1.5.1. Variable Independiente	21

1.5.2. Variable Dependiente	21
1.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección.....	21
1.6.1 Métodos	21
1.6.1.1. Método Exegético Jurídico.....	22
1.6.1.2. Método Sistemático Jurídico	22
1.6.1.3. Método Hipotético Deductivo	22
1.6.1.4. Método Inductivo.....	23
1.6.2. Técnicas	23
1.6.3. Instrumentos.....	26
1.6.4. Análisis estadísticos de los datos	28
Presentación de Datos	28
Procesamiento de Datos	29
CAPITULO II.....	30
LAS DECLARACIONES PREVIAS EN EL PROCESO PENAL	30
2.1. El garantismo como parte del proceso penal.	30
2.1. Características del nuevo proceso penal	31
2.1. Estructura del Proceso Penal	33
2.1.1. La Investigación Preparatoria.....	33
2.1.1.1. Las diligencias preliminares	34
2.1.1.2. Investigación Preparatoria	36
2.1.1. Etapa Intermedia	38
2.1.1. Etapa de Juzgamiento	39
2.1. Derecho a Guardar Silencio	42

2.1. El juzgamiento y la valoración de la Declaración del Imputado como Prueba en el Juzgamiento	46
2.1.1. La Valoración del Derecho a Guardar Silencio.....	48
2.1.1. Derecho a Guardar Silencio en las Etapas del Proceso Penal.....	52
CAPITULO III	56
LA ORALIZACIÓN DE LAS DECLARACIONES PREVIAS EN JUICIO ORAL	56
3.1. La valoración de las declaraciones previas en función al indicio de Culpabilidad	56
3.2. El Debido Proceso como garantía de seguridad jurídica....	61
3.2.1. Imparcialidad del Juez	62
3.2.2.. Presunción de Inocencia	70
3.2.3. La información como derecho	75
3.2.4. Valoración de las Pruebas	77
3.2.5. Derecho a Declarar Libremente.....	80
3.2.6. Derecho a Declarar Libremente.....	84
CAPÍTULO IV	88
ANÁLISIS Y RESULTADOS	88
Análisis de la valoración de las declaraciones previas del imputado vulneran las garantías constitucionales.	88
CAPÍTULO V.....	101
CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS	101
5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.....	101

5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar doctrinariamente las declaraciones previas del imputado en las etapas del proceso penal”	101
5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Estudiar la realidad de la oralización de las declaraciones previas del imputado en el juicio oral”.	103
5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Analizar si la valoración de las declaraciones previas del imputado vulneran las garantías constitucionales”.....	104
5.2. RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES	106
5.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS	108
CONCLUSIONES	110
RECOMENDACIONES.....	112
BIBLIOGRAFÍA.....	113
ANEXOS	116
1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos. ..	116

RESUMEN

El ordenamiento penal peruano se caracteriza por la tendencia garantista que obedece a la defensa de los derechos fundamentales, precisamente ello es lo que despierta el interés por desarrollar esta investigación, dado que se advierte de la observación de la realidad el hecho de la vulneración de ciertos derechos como el de la presunción de inocencia y otros más en el desarrollo de los procesos penales, específicamente en la etapa que concierne al juicio oral.

Dentro de los derechos consignados se ubica el de la no autoincriminación como amplía perspectiva del derecho a la defensa, se traduce o encuentra un referente material en el derecho a abstenerse de declarar, de guardar silencio o también llamado reserva de la declaración o defensa material pasiva, es en base a ello que surge como motivación el cuestionamiento del rol que desempeña la introducción de las declaraciones previas en la etapa de juicio oral, entendiendo que ingresan a ésta etapa en obediencia a lo prescrito en el artículo 376.1 el mismo que indica la oralización de tales declaraciones brindadas en una etapa diferente y previa a la que se estudia, (etapa preliminar), ello en atención a la finalidad que estaría cumpliendo, esto es el hecho de recabar información, bajo la figura que el imputado haya hecho ejercicio de su derecho a no declarar.

Palabras Claves: Valoración Probatoria, Declaraciones Previas, Derecho A Guardar Silencio, Juicio Oral

ABSTRACT

The Peruvian criminal system is characterized by the guarantee trend that is due to the defense of fundamental rights, precisely this is what arouses the interest to develop this investigation, since the fact of the violation of certain warnings is warned rights such as the presumption of innocence and others in the development of criminal proceedings, specifically at the stage concerning oral proceedings.

Among the rights consigned is that of non-self-discrimination as a broader perspective of the right to defense, a material reference is translated or found in the right to refrain from declaring, keeping silent or also called reserving the declaration or passive material defense, it is based on this that the questioning of the role played by the introduction of previous declarations in the stage of oral trial arises as a motivation, understanding that they enter this stage in obedience to what is prescribed in article 376.1 which indicates the oralization of such statements provided at a different stage and prior to the one studied, (preliminary stage), this in view of the purpose that would be fulfilling, this is the fact of collecting information, under the figure that the accused has exercised his right not to declare.

Keywords: Probationary Assessment, Prior Statements, Right to Keep Silence, Oral Trial

INTRODUCCIÓN

Resulta de amplio interés el desarrollo de esta investigación puesto que servirá de mucha utilidad el hecho de determinar cuáles serían los argumentos básicos para solicitar vía oposición que no se permita en juicio oral la lectura de la declaración previa del imputado y con ello asegurar la primacía del principio de no autoincriminación; tal circunstancia observada en los procesos penales en los cuales se ha hecho uso del derecho a guardar silencio.

Es preciso indicar que dicho principio faculta la interpretación in bonam partem en el sentido de que si el imputado decide no declarar en juicio, el hecho de pretender se lea la declaración que rindió anteriormente advirtiéndosele de tal fin, implica una coacción, una amenaza, una inducción a verter su versión de los hechos, pues si bien en la declaración preliminar no hubiera aceptado responsabilidad o no hubiera narrado algo comprometedor a su persona como sujeto de imputación, también lo es que el simple hecho que se le amenace con recordarle su declaración ya significa una intimidación hacia él, una forma de violentar su decisión de guardar silencio en juicio oral.

Finalmente lo que se ha pretendido demostrar en esta investigación es la existencia de la vulneración del derecho a la defensa, no debe dejarse de lado el hecho de que el imputado es el sujeto pasivo del proceso, es contra quien recae directamente la violencia persecutoria y punitiva del estado, de tal suerte que si se aplica esta norma inquisitiva ya se le está sometiendo a mecanismos de inducción dirigidos a doblegar su voluntad inicialmente plasmada: no declarar.

Es precisamente en base a esta circunstancia jurídica de la realidad que se pretendió encuadrar un cuestionamiento que se puede observar como la formulación del problema bajo la siguiente interrogante: ¿De qué manera, la oralización de las declaraciones previas del imputado en juicio oral vulnera las garantías constitucionales que inspiran el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva?, la misma que en base al conocimiento previo a la investigación dio origen a una respuesta a priori que se traduce en la siguiente hipótesis:

Si, de alguna manera se evidencia que la lectura de la declaración previa se admite en juicio oral porque es parte de las técnicas de litigación oral y como tal se debe desarrollar; entonces, se permitiría la vulneración de las garantías constitucionales por parte de los operadores jurídicos que no han logrado entender que el equilibrio entre la garantía y eficacia es la premisa básica del nuevo sistema procesal penal.

Es de advertir que tanto la figura de la formulación del problema como interrogante cuanto la hipótesis como su respuesta inicial, están conformadas por dos elementos esenciales que son las variables que bajo una relación causa efecto se describen de la siguiente manera:

La variable independiente: La oralización de las declaraciones previas del imputado en juicio oral.

Variable dependiente: Las garantías constitucionales que inspiran el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.

Ambos elementos también están componiendo el objetivo general así como los objetivos específicos, los mismos que se constituyen como las metas de la investigación y que en razón de ello han dotado de contenido a la investigación, lo cual ha servido de base para el desarrollo de la discusión que permitió conseguir los fundamentos para validar las variables iniciales y contrastar la hipótesis inicial.

El Autor.

CAPITULO I

ASPECTOS METODÓLOGICOS

1.1. Realidad Problemática

1.1.1. Planteamiento del Problema

El nuevo Código Procesal Penal, como fiel instrumento propio de un sistema acusatorio, en esencia garantista y de tendencia adversarial, establece en el artículo IX de su Título Preliminar que: “Nadie puede ser obligado o inducido a declarar o a reconocer culpabilidad contra sí mismo...” no cabe duda que nos encontramos ante la presencia inequívoca del principio de no autoincriminación en su mas amplia y contemporánea expresión, el cual viene a ser una legítima y abierta reafirmación de los derechos constitucionales de defensa y de la presunción de inocencia, reconocidos por las modernas sociedades democráticas y de derecho, en las cuales el respeto a las garantías constitucionales y procesales son el pilar fundamental en la estructuración de sus sistemas jurídicos y a la vez forman parte del principio de limitación del poder estatal, cuya función es poner barreras al uso monopolizado de la violencia institucionalizada por ley.

Desde un aspecto normativo, es de rigor señalar que en cuanto a los instrumentos jurídicos de carácter internacional, éste principio se encuentra claramente reconocido en el artículo 8.2 g) de la Convención Americana de

Derechos Humanos y 14.3 g) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los cuales nuestro país forma parte y por ende su observancia y cumplimiento son obligatorios, tomándose a la vez en referencias ineludibles del proceso penal. Así mismo, haciendo un repaso por la legislación comparada, se puede advertir incluso que la Constitución Política de Colombia (art. 33) y de Estados Unidos (quinta enmienda) lo han elevado a la categoría de precepto constitucional, siendo que en el caso de esta última, ha sido la corte suprema de dicho país la encargada de desarrollar su interpretación precisando el contenido y alcances de dicho principio; no sucediendo lo mismo con nuestra actual carta magna en la cual explícitamente no se ha reconocido este principio, tal como si sucedía con la de constitución de 1979 que lo establecía en su artículo 2.20 k); sin embargo ello no significa que actualmente no se encuentre amparado constitucionalmente, pudiendo remitirnos para ello al artículo 2.24 h) concordante con el artículo 3 de la mencionada norma suprema nacional.

La no autoincriminación como amplía perspectiva del derecho a la defensa, se traduce o encuentra un referente material en el derecho a abstenerse de declarar, de guardar silencio o también llamado reserva de la declaración o defensa material pasiva, adoptado por nuestro nuevo código adjetivo en el artículo 71.2 d) en lo que a derechos del imputado respecta y; sin duda alguna constituye en estricto una garantía que limita la potestad estatal de búsqueda de la información probatoria, concretamente la realizada desde el punto de vista de la labor fiscal, pues debe entenderse que siendo el imputado la principal fuente de información, de la cual se puede valer el fiscal para obtener aquella que requiere para reforzar su tesis

incriminatoria, en un sistema propio de los gobiernos republicanos y democráticos no se acepta bajo ninguna justificación exigírsele que declare o que colabore con la investigación vertiendo aquello que conoce del caso en concreto, pudiendo incluso faltar a la verdad si así lo desea.

La presente investigación se ha motivado en base a la revisión de la estructura procesal que incorpora el nuevo Código para el desarrollo del juzgamiento, así es que surge como motivación el cuestionamiento del rol que desempeña la introducción de las declaraciones previas en la etapa de juicio oral, entendiendo que ingresan a ésta etapa en obediencia a lo prescrito en el artículo 376.1 el mismo que indica la oralización de tales declaraciones brindadas en una etapa diferente y previa a la que se estudia, (etapa preliminar), ello en atención a la finalidad que estaría cumpliendo, esto es el hecho de recabar información, bajo la figura que el imputado haya hecho ejercicio de su derecho a no declarar.

Artículo 376.1 del Código Procesal Penal:

Si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el juez le advertirá que, aunque no declare el juicio continuará, y se leerán sus anteriores declaraciones prestadas ante el fiscal.

En primer lugar realizando una lectura breve de la norma procesal, advertimos claramente en su redacción el empleo del término rehúsa, el cual es sinónimo de desdeñar, rechazar, repudiar, como si se tratara de la respuesta a una imposición, coacción o amenaza; al parecer desde nuestra óptica poco acertado en su incorporación, más aun tratándose de un código con bases constitucionales,

creemos firmemente que el término correcto en la formulación gramatical de la misma hubiera sido no acepta, por resultar el más apropiado a la pregunta que el juez formula en juicio: acepta declarar o no? y por reflejar el trato que como sujeto y no objeto del proceso ocupa en este nuevo sistema el imputado. A continuación, el citado artículo señala que el juez le hará la advertencia, esto es al acusado, siendo la última sinónimo de amenaza; vale decir notamos que se trata de una norma altamente intimidatoria que nunca debió considerarse dentro de las reglas de litigación oral recogidas por el nuevo código, pues estamos ante la presencia de una norma de corte inquisitivo en el cual si una persona se rehusaba a declarar ante los tribunales se empleaba la coerción como tortura para inicialmente intimidarla y luego para doblegar su voluntad.

Ahora bien, ésta temática procesal se encuentra dividida, así tenemos la existencia de jueces que permiten la aplicación de ésta norma transgresora; vale decir ante la negativa del imputado a declarar en juicio oral, consienten y/o propician hasta muchas veces de oficio, la lectura de su eventual declaración prestada en sede policial o despacho fiscal según sea el caso, sin aceptar la férrea oposición planteada por la defensa quien haciendo uso de los mecanismos legales, solicita no cometer tal equivocación y aplicar las garantías que la ley nos franquea; sin embargo por el contrario y en aras de la mejoría y salud del nuevo sistema, se están empezando a manifestar decisiones plausibles adoptadas por operadores jurisdiccionales que al parecer han escuchado los argumentos básicos de la defensa y en determinadas sesiones de juzgamiento se ha decidido no permitir la lectura de la declaración indagatoria del imputado, aun cuando tal decisión haya sido

cuestionada reflexionamos por una pura cuestión de supuesta eficacia procesal por los representantes del Ministerio Público, quienes al igual que aquellos jueces que si admiten la lectura, basan su pretensión en el repetido argumento que: “La norma lo permite, o porque así está establecido en el código” perdiéndose de vista la óptica y premisa fundamental de un sistema garantista: el respeto a los principios y derechos fundamentales del imputado, en pocas palabras la percepción e interpretación que realizan de la norma adjetiva es limitada.

Básicamente la preocupación radica en analizar la situación en que el imputado no desea declarar o cuando se manifiesta también que no desea se dé lectura a sus declaraciones previas, por lo mismo que resulta correcto entender que tal acción terminaría siendo una vulneración de los derechos que corresponden al imputando en base a las garantías que otorga el garantismo que caracteriza al derecho penal y procesal.

El Ministerio Público, al evaluar las fases del iter criminis y realizar la debida interpretación a los filtros de imputación objetiva, llegará a la fase de culpabilidad de la acción típica y jurídicamente reprochable, al sujeto que ingresa al proceso en calidad de inocente se le atribuye la imputación por el hecho que con posterioridad será materia de investigación penal, en la primera etapa del proceso, participando en calidad de investigado.

En ese sentido, durante el proceso de investigación, el procesado ejerce sus derechos constitucionalmente reconocidos en la carta magna; de tener responsabilidad o no, seguirá contando con los mismos derechos, dentro de ellos

obra el derecho a no declarar, subsumido en el derecho de no autoincriminación, la capacidad de no auto incriminarse por el hecho reprochable.

Es en este momento procesal donde surge el problema que nos planteamos investigar, siendo de importante necesidad verificar si es que resultaría posible actuar en juicio oral las declaraciones previas del imputado sin menoscabar la estructura del examen de culpabilidad que forma parte del razonamiento que determine la imputación de un determinado delito

1.1.2. Formulación del Problema

¿De qué manera, la oralización de las declaraciones previas del imputado en juicio oral vulnera las garantías constitucionales que inspiran el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva?

1.2. Justificación e Importancia del Estudio

1.2.1. Justificación del Estudio

La principal justificación que se hubo advertido para el desarrollo de esta proyección radica en determinar cuáles serían los argumentos básicos para solicitar vía oposición que no se permita en juicio oral la lectura de la declaración previa del imputado y con ello asegurar la primacía del principio de no autoincriminación.

dicho principio nos faculta interpretar in bonan partem en el sentido que si el imputado decide no declarar en juicio, el hecho de pretender se lea la declaración que rindió anteriormente advirtiéndosele de tal fin, implica una coacción, una amenaza, una inducción a verter su versión de los hechos, pues si bien en la declaración preliminar no hubiera aceptado responsabilidad o no hubiera narrado algo comprometedor a su persona como sujeto de imputación, también lo es que el simple hecho que se le amenace con recordarle su declaración ya significa una intimidación hacia él, una forma de violentar su decisión de guardar silencio en juicio oral, traducido finalmente en la vulneración a su derecho a la defensa, no debemos olvidar que el imputado es el sujeto pasivo del proceso, es contra quien recae directamente la violencia persecutoria y punitiva del estado, de tal suerte que si se aplica esta norma inquisitiva ya se le está sometiendo a mecanismos de inducción dirigidos a doblegar su voluntad inicialmente plasmada: no declarar.

1.2.2. Importancia del Estudio

Resulta de gran importancia la elaboración de este proyecto, puesto que permite difundir desde en cierto modo la pequeña semilla de los fundamentos mínimos para propiciar el respeto y vigencia del principio de no autoincriminación en cuanto a la aplicación de un instrumento adjetivo moderno se refiere, siempre en ponderación de las demás garantías y derechos que le asisten a todos los sujetos procesales dentro de un sistema acusatorio.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Determinar si la oralización de las declaraciones previas del imputado en juicio oral vulnera las garantías constitucionales que inspiran el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.

1.3.2. Objetivos Específicos

- ✍ Desarrollar doctrinariamente las declaraciones previas del imputado en las etapas del proceso penal.
- ✍ Estudiar la realidad de la oralización de las declaraciones previas del imputado en el juicio oral.
- ✍ Analizar si la valoración de las declaraciones previas del imputado vulneran las garantías constitucionales.

1.4. Hipótesis

Si, de alguna manera se evidencia que la lectura de la declaración previa se admite en juicio oral porque es parte de las técnicas de litigación oral y como tal se debe desarrollar; entonces, se permitiría la vulneración de las garantías

constitucionales por parte de los operadores jurídicos que no han logrado entender que el equilibrio entre la garantía y eficacia es la premisa básica del nuevo sistema procesal penal.

1.5. Variables

1.5.1. Variable Independiente

La oralización de las declaraciones previas del imputado en juicio oral.

1.5.2. Variable Dependiente

Las garantías constitucionales que inspiran el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.

1.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección

1.6.1 Métodos

En nuestra investigación haremos uso de los siguientes métodos, los cuales nos permitirán desarrollar la observación de una forma adecuada y sistemática, así tenemos:

1.6.1.1. Método Exegético Jurídico

Este método será aplicado para interpretar el sentido de las normas recopiladas respecto a las declaraciones previas del imputado en las etapas del proceso penal; detalle que se confrontará con la realidad nacional, permitiendo obtener cifras como resultados, en base a las cuales podrá contrastarse la hipótesis planteada.

1.6.1.2. Método Sistemático Jurídico

Este método podrá ser empleado para realizar un análisis conjunto e interrelacionado de nuestro ordenamiento jurídico penal, lo cual nos permitirá arribar a la mejor conclusión del informe de investigación.

1.6.1.3. Método Hipotético Deductivo

Al emplear el método hipotético deductivo podremos verificar su apoyo metodológico al momento de elaborar la hipótesis de trabajo, y en el transcurso de la investigación para realizar un correcto estudio del tema abordado desde comprender su naturaleza hasta llegar a sus manifestaciones específicas para casos concretos.

1.6.1.4. Método Inductivo

La aplicación de este método nos permitirá analizar el material de estudio, el mismo que ha de servir de base para demostrar la hipótesis de mi trabajo, así como para la elaboración de mis conclusiones y recomendaciones finales.

1.6.2. Técnicas

En el desarrollo de este tema, se usaron las técnicas de recolección de la información que permitió establecer los parámetros con los que se ha definido la propuesta, permitiendo plantear al final las sugerencias en función a los resultados, técnicas que se procede a describir.

✓ **Análisis Documental.-** Se usaron fichas bibliográficas, las cuales se trabajaron en base al formato APA contenido en la regla internacional y que se aplica como herramienta electrónica bajo el soporte del programa Word de Microsoft, puntualizando datos de las fuentes de información como son revistas, informes de tesis, libros y otros; además de ello se han creado fichas de investigación documental como es el caso de las que se aplicaron sobre el derecho a guardar silencio, la valoración de las pruebas, la valoración del silencio del imputado en el juicio oral y todo ello relacionado con el interés constitucional de las garantías en el proceso penal.

Es con estos resultados que se van a orientar las búsquedas que corresponden a otras fuentes documentales y de textos que se han publicado en materia de Derecho Penal, con el fin de ubicar la naturaleza jurídica de las declaraciones previas del imputado y la consecuencia de su valoración ante la circunstancia del ejercicio de su derecho a guardar silencio, para verificar si se proyecta como una vulneración al principio de la no auto incriminación y la presunción de inocencia, sobre todo a las prerrogativas del debido proceso penal, para satisfacer la seguridad jurídica que debe tener el control social coercitivo de parte del Estado.

✓ **Observación.-** Se ha utilizado la guía de observación, con la cual se ha observado la realidad socio jurídica que engloba la necesidad de ejercer el control social, la misma que se proyectó en un esquema que inicia con el objeto de observación y se configura de la siguiente manera:

GUÍA DE OBSERVACIÓN.

- **Objeto de Observación:** verificación de la oralización de las declaraciones previas del imputado en juicio oral vulnera las garantías constitucionales que inspiran el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.
 - Criterios de observación:
 - Motivación de las sentencias basadas en la valoración de las declaraciones previas.
 - Motivación de la sentencia basadas en criterios distintos a la valoración de las declaraciones previas

✓ **Encuesta.-** Se empleó la guía de encuesta; la cual ha sido aplicada a personas que conocen el tema materia de observación, integrando a operadores jurídicos como son abogados especialistas en derecho penal, quienes han plasmado sus opiniones respecto de la problemática jurídica advertida en la valoración de las declaraciones previas en el contexto del juicio oral, con el fin de verificar si corresponde a una vulneración el derecho a la defensa, del derecho a guardar silencio, de los principios de presunción de inocencia y la no auto incriminación.

Para la determinación de la cantidad de participantes en la encuesta se ha tenido en cuenta el criterio de conveniencia por tratarse de una investigación no probabilística según lo considerado como un muestreo no probabilístico por conveniencia, de acuerdo a lo que se señala “las técnicas de muestreo de tipo no probabilísticas, la selección de los sujetos a estudio dependerá de ciertas características, criterios, etc. que él (los) investigador (es) considere (n) en ese momento (...)” (Walpole & Myers, 1966). Por conveniencia porque permite seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador (Otzen & Manterola, 2017) (Otzen & Materola, p. 227-232. 2017).

Es en razón de ello la marcación por conveniencia al señalar la muestra de 50 operadores jurídicos que serán abogados litigantes especialistas sobre los cuales se aplica la encuesta para opinar sobre la determinación de los criterios que se adoptan en el juzgado respecto a la aplicación de la regla de indemnización estudiada.

1.6.3. Instrumentos

Los instrumentos son los medios auxiliares para recoger y registrar los datos obtenidos a través de las técnicas.

✓ **La Ficha.-** Es un instrumento que se utilizó en la técnica del fichaje, y ha servido para localizar las fuentes y también para almacenar la información que se va obteniendo durante la investigación, las mismas que han trabajado en base al formato APA contenido en la regla internacional y que se aplica como herramienta electrónica bajo el soporte del programa Word de Microsoft, puntualizando datos de las fuentes de información como son revistas, informes de tesis, libros y otros, bajo el siguiente formato electrónico:

✓ **La Guía de Observación.-** Instrumento que se utilizó en la técnica de la observación, y servirá para realizar una observación directa no participante del objeto materia de investigación, lo cual se ha trabajado en base al formato de guía

de observación siguiente:

GUÍA DE OBSERVACIÓN		
Objeto de Estudio:		
Criterio de evaluación	Si	No
Criterio 1	-	-
Criterio 2	-	-
TOTAL	-	-

✓ **La Guía de Encuesta.-** Es un instrumento que se utilizó en la técnica de la encuesta, y consistió en un conjunto de preguntas que se elaborarán para que sirvan de orientación en el dialogo que se debe tener con los encuestados que son los conocedores del tema, en tanto abogados especialistas en la materia penal y se elaboró en función de los ejes temáticos de la investigación, esto es en base a las variables de investigación bajo el siguiente criterio:

Variable independiente:

La oralización de las declaraciones previas del imputado en juicio oral; sobre la cual se desarrollaron tres afirmaciones bajo el criterio de definición, crítica y propuesta, con la alternativa de respuesta a marcar según la perspectiva:

- a) De acuerdo
- b) En desacuerdo
- c) No opina.

Variable dependiente:

Las garantías constitucionales que inspiran el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva; sobre la cual se desarrollaron tres afirmaciones bajo el criterio de definición, crítica y propuesta, con la alternativa de respuesta a marcar según la perspectiva:

- a) De acuerdo
- b) En desacuerdo
- c) No opina.

.

1.6.4. Análisis estadísticos de los datos

Consiste en describir cómo será analizada estadísticamente la información.

Presentación de Datos

Los datos obtenidos serán presentados de la siguiente manera:

- a.** Los datos cualitativos, serán presentados en fichas.

- b.** Los datos cuantitativos, serán presentados en cuadros y gráficos.
- c.** También podrá incluirse fotografías y filmaciones editadas.

Procesamiento de Datos

- a.** Crítica y discriminación de datos; los datos obtenidos y que se encuentran presentados en fichas, cuadros, gráficos y otros, serán evaluados por el investigador, para ver si estos se encuentran completos, si han sido correctamente obtenidos y si son auténticos, de tal manera que solamente nos quedaremos con aquellos datos que son confiables, mientras que no lo son, serán descartados.

- b.** Tabulación de datos; a los datos que hayan pasado el procedimiento de crítica y discriminación de datos, y que se encuentran presentados en fichas, cuadros, gráficos y otros, se les asignará un código a cada ficha, cuadro, gráfico u otro, el cual se hará teniendo en cuenta el esquema de investigación que se anexa al final del presente proyecto de investigación.

- c.** Tratamiento de datos: Los datos que hayan sido tabulados, serán ordenados de acuerdo al código que se les haya asignado, para su correspondiente análisis, conforme a lo propuesto en el método de análisis, expuesto precedentemente.

CAPITULO II

LAS DECLARACIONES PREVIAS EN EL PROCESO PENAL

El desarrollo de esta investigación tiene como principal eje temático la consideración de las declaraciones previas en el proceso penal, teniendo en cuenta su ubicación y la forma en que son tenidas en cuenta, por lo cual se debe iniciar por el entendimiento de la estructura del proceso penal en sí, para ubicar luego el momento adecuado de la participación de las declaraciones sin que se vulneren los derechos fundamentales del imputado.

2.1. El garantismo como parte del proceso penal.

El derecho penal, siendo una herramienta útil para el Estado Constitucional y Democrático de Derecho a fin de cumplir con su labor de control social, requiere de un esquema especial para que las reglas que condicionan el comportamiento del hombre en la sociedad sea efectivamente sancionadoras, en tanto se identifique la acción ilícita, esta función la desempeña el proceso penal que diseña a través de un conjunto de reglas, toda la estructura que permitirá el desarrollo de la investigación que determine la correspondiente acción punitiva del Estado.

Es así como dicha estructura ha de cumplir con ciertos requisitos que puedan ser considerados como parte del ordenamiento jurídico de un estado, por lo mismo que ha de coincidir con el sentido de la norma constitucional, es decir contener garantías que permitan ejecutar un proceso justo y adecuado, tal como lo menciona Alberto Binder (1993), en su libro: *Introducción del Derecho Procesal Penal*, señala que:

Muchas de las garantías y principios que pueden presentarse en las bases del proceso penal podrían verse distorsionadas por la estructura incorrecta de las mismas, ya que la organización y principios básicos,

muchas veces sucumben ante las reglas de la organización procesal (pág. 207).

Lo que se puede extraer de la cita incorporada es el hecho de que existen reglas procesales que no necesariamente se ajustan al esquema garantista que supone el derecho penal, en si lo que debe reconocerse es el hecho de que la forma en que se ha considerado el proceso penal debería tener una cierta coincidencia con los principios que orientan al derecho penal sustantivo, sólo así podría existir coherencia entre la norma general y la regla que lo desarrolla, esta es una característica que se aprecia en el Código Procesal del 2004.

Es en dicho proceso donde se ubica la investigación preparatoria cuya función principal es asegurar todo cuanto condujere a la comprobación de un hecho presuntamente ilícito y a la identificación de quienes hayan participado, para el que órgano público de persecución penal pueda decidir si formula acusación en contra de una determinada persona o solicita sobreseimiento; como segunda etapa, encontraremos a la fase intermedia donde se critica, analiza y controla el resultado de la investigación y se realiza el control de la acusación o del sobreseimiento; y, como tercera etapa tenemos al juicio oral, donde se lleva a cabo la audiencia central y se evidencia los principios del sistema acusatorio y del juicio oral propiamente dicho, etapa en la que precisamente se evidencia el problema que esta investigación advierte.

2.1. Características del nuevo proceso penal

La crítica que se desarrolla respecto al nuevo proceso penal requiere de la comprensión previa del mismo, que conforme ya se ha resaltado anteriormente, deber

estar conteniendo un esquema garantista, esto es regido por principios procesales que manan de otros de carácter general, pero la existencia de este tipo de actos que conllevan a la ejecución del fin del derecho penal debe tener una orientación que esta basada en función a la estructura del ordenamiento penal mismo.

Por ello es que debe reconocer que este proceso tiene como principal característica que forma parte de un sistema de corte acusatorio y con las características propias del proceso moderno: a) la separación de funciones de investigar y juzgar a cargo del Fiscal y del Juez, otorgándose al Ministerio Público la tarea de la persecución penal de los delitos públicos; b) el predominio de los principios de oralidad y de contradicción en cada una de las audiencias que prevé la ley; y, c) el fortalecimiento de las garantías procesales a favor del imputado y agraviado en paridad de condiciones y posibilidades de intervención.

Es en virtud de estas características que se puede evidenciar la principal de ellas, cuando menos para la orientación de la investigación en curso, el hecho de que se corrobore el carácter garantista, lo cual se entiende ha de ser visto desde la perspectiva de la igualdad de condiciones que se otorga a cada una de las partes, es decir que los estándares de defensa sea paritario, evitando con ello la vulneración de los derechos fundamentales.

Interesa por ello reconocer si es que en todas las etapas del proceso penal que se ha implementado en nuestro ordenamiento, cuenta con esta característica en todas las etapas que lo componen, sólo así se podrá identificar la forma adecuada en que se ha de tratar la valoración de las declaraciones previas del imputado, durante la etapa del juicio oral, puesto que tal diagnóstico de las etapas permitirá establecer con exactitud si la estructura se condice con la constitucional que debe imperar en el tratamiento del delito.

2.1. Estructura del Proceso Penal

Hasta el momento se ha venido describiendo al proceso penal como una secuencia de eventos o procedimientos que encadenados pasan a formar parte de la estructura de la persecución penal como aplicación del ius puniendi del Estado, basado en las reglas que otorga el derecho penal para la determinación de la responsabilidad del delito.

Dicha secuencialidad que caracteriza al nuevo proceso penal, se encuentra configurada en el Código adjetivo penal bajo el siguiente diseño: Investigación preparatoria, el control de acusación y el juicio oral. Siendo cada una de ellas importante en su momento de ejecución puesto que la distribución permite entender que se ha hecho en razón de la especialidad que agrupa a cada uno de los actos que se desarrollan en cada una.

Lo cual sirve de argumento para el planteamiento de esta investigación, puesto que la forma en que se desarrolla dicha estructura separando etapas, significa el marcador del fenecimiento de las acciones, que se dan según el criterio de oportunidad, puesto que cada acción para que sea válida deberá actuarse en su momento específico y bajo las condiciones que se espera según lo señalado por el sistema procesal penal.

2.1.1. La Investigación Preparatoria

La puesta en marcha del aparato punitivo como control social del Estado da inicio con la noticia criminal, que así se le ha llamado al evento de la puesta en conocimiento del Ministerio Público o de la Policía Nacional respecto de un hecho que puede ser considerado como ilícito y que debería ser merecedor de una sanción, que de acuerdo a su gravedad o quizá sobre su certeza será tratado por el sistema de control, a cuyo

momento se le conoce como la etapa de investigación preparatoria; en la cual se aprecian las diligencias preliminares y la investigación preparatoria propiamente dicha.

2.1.1.1. Las diligencias preliminares

Tal cual se señala en el lenguaje común, el dicho de que el inicio de toda actividad marca el éxito de su fin, por lo mismo que se ha dado la importancia debida a esta etapa en el sistema procesal penal que rige en el ordenamiento penal peruano, así la correcta ejecución de los actos que se incorporan en esta porción del proceso son de vital importancia puesto que pueden incluso direccionar la sentencia penal. Es puntualmente en esta etapa donde se ubica el origen del problema evidenciado puesto que aquí es el momento donde se producen las primeras declaraciones, actuaciones investigatorias y aseguramiento de los primeros elementos de prueba; los mismos que van a ser sustanciales para la decisión fiscal posterior de acusación o sobreseimiento de la causa, desde luego después de alcanzar la necesaria certeza que promueva la convicción del juzgador para admitir dichos eventos.

De acuerdo al diseño procesal penal, en esta etapa luego del conocimiento de la noticia criminal la dirección está a cargo del Ministerio Público, representada por el Fiscal, quien la dirige y cuenta con el apoyo de la Policía Nacional, con la que coordina su actuación conjunta, por eso cuando la Policía interviene de oficio, tiene el deber de dar cuenta al director de la misma, y en cuanto a la toma de las declaraciones deben hacerse en presencia del fiscal y del abogado de la defensa del imputado.

Esto último es uno de los aspectos en los cuales se puede identificar la participación de las garantías procesales que conforman esta parte del proceso penal, así entendiéndose pues que estas derivan de las directrices generales que operan sobre el derecho penal sustantivo y más arriba aún desde la Constitución; siendo así se puede

reconocer a la intervención de la defensa como una de las garantías más importantes para las partes involucradas.

Dentro de las características que más resaltan en este momento de la investigación conocida como diligencias preliminares se encuentra la actuación del Ministerio Público y la Policía Nacional con el fin de establecer a) si los hechos denunciados han tenido lugar y si tienen carácter delictuoso; b) asegurar los elementos materiales de su comisión; c) individualizar a las personas involucradas en su comisión. Es importante aclarar que todos estos pasos, están dirigidos a determinar si el Fiscal debe formalizar o no la investigación preparatoria. A ese nivel son encomendadas a la Policía Nacional el desarrollo de las diligencias como son: a) declaraciones policiales; b) pericias; y, c) actas policiales.

Siendo así, la ejecución de estos actos, deben contar con ciertas peculiaridades que permitan verificar la garantía procesal que se supone debe estar inmersa en todas las etapas del proceso penal como son a) la inmediatez en la recepción de la declaración; y, b) la verificación o comprobación de lo declarado por el imputado, agraviado o testigo. Se trata de declaraciones formales, puntuales y con suscripción del acta por los participantes.

Es importante recalcar que la ejecución de estas diligencias en cuanto a lo que se refiere a la característica de temporalidad tienen un plazo distinto, esto es, de 20 días naturales (que es el plazo con la norma original), sin perjuicio de que el fiscal pueda fijar un plazo distinto según las características, la complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación. Pese a ello la Ley que permite combatir la inseguridad ciudadana Ley № 30076, hace un cambio en el apartado 2 del artículo 334 y prescribió que el plazo de las diligencias preliminares, es de 60 días, salvo que se produzca la detención de una

persona. No obstante, a ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación.

2.1.1.2. Investigación Preparatoria

Conforme se hubo reseñado anteriormente la primera fase del proceso penal esta constituido por las diligencias previas que ya se explicaron y luego corresponde el pase a la investigación preparatoria, donde el Fiscal sigue siendo el director de la etapa, de tal manera que su actuación ha de estar informada por los principios que le son inherentes. Una vez iniciada la investigación preparatoria, todo lo actuado en la fase preliminar pasa a formar parte de aquella, de tal manera se convierte en un todo, en una unidad; todo bajo el carácter de diligencias formales que deben de realizarse durante esta etapa, la actuación de los sujetos procesales y las medidas necesarias para alcanzar sus objetivos. Todo ello con la finalidad de reunir pruebas ya sea de oficio y a pedido de las partes sobre el delito y su autor, sean estas pruebas de imputación como de exculpación.

Es preciso señalar que el inciso 1 del Artículo 321° del Código Procesal Penal, señala que la investigación preparatoria persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al fiscal decidir si formula o no la acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa; todo esto es referenciado por Montero Aroca, quien en su libro: *Sobre la Imparcialidad del Juez y la Incompatibilidad de Funciones Procesales*, señala que:

La finalidad de la investigación preparatoria no es preparar sólo la acusación, sino que la actividad preliminar debe servir tanto para lo que

determina la inculpación como para lo que excluye, es decir, debe servir para preparar tanto la acusación como la defensa (pág. 286).

Se trata entonces pues, de una suerte de tamiz para la incursión del sentido persecutorio del ius puniendi del Estado, así sus principales funciones son: preparar el juicio oral y/o evitar juicios innecesarios, a través de una actividad investigativa, esto es, indagando para tratar de llegar al cabal conocimiento de los hechos y de las personas que en ellos participaron, consignando todas las circunstancias tanto adversas como favorables al imputado.

Se ha llegado al punto donde se encuentra el punto de inicio de la investigación, así se entiende que es en esta fase donde se desarrolla la declaración del imputado, resultando esta declaración complementaria, debido a que debe haber prestado declaración en la etapa preliminar. Si no hubiera declarado antes constituiría el primer acercamiento formal que hace la persona investigada a fin de declarar sobre los hechos que motivan la investigación y poder como se dijo antes llegar a mostrar al fiscal el indicio de culpabilidad o inocencia.

La toma de estas declaraciones tienen que cumplir ciertos parámetros que establece el Código Procesal Penal, teniendo en cuenta que su declaración posterior es un complemento desarrollado en la investigación preparatoria; es importante recalcar el hecho de que la presencia de las garantías procesales están presentes puesto que siendo el derecho a la defensa el primer ámbito que se comprende como requisito, se puede verificar en el hecho de que la regla indica que la declaración del imputado se hace ante el Fiscal cuando éste lo disponga, con intervención de su defensor, así como también debe señalarse el derecho que tiene el imputado de ampliar su declaración debiendo accederse

a dicho pedido. Sólo podrá rechazarse el pedido si se apreciare intención dilatoria o maliciosa, lo cual se establece como un límite para asegurar las garantías procesales.

Existe también una consideración cronológica en cuanto a los plazos que se otorga en el proceso penal a esta etapa, comprendiéndose el de 120 días naturales y existiendo causa justificada se puede ampliar por el Fiscal por única vez hasta un máximo de 60 días naturales. También se contempla la posibilidad de extender el plazo hasta por 8 meses más cuando se trata de casos complejos.

2.1.1. Etapa Intermedia

Esta fase que corresponde al proceso penal tiene por finalidad revisar el sentido y certeza de la información recogida en la investigación preparatoria; se puede entender como un filtro que tiene como función, depurar errores y controlar los presupuestos o bases de la imputación y de la acusación, primero por el propio órgano acusador y luego por el órgano judicial, a fin de establecer si es viable para convocar a juicio oral o si es que se opta por el sobreseimiento de la causa, lo cual dependerá de otros factores también reseñados en la estructura procesal.

Su contenido está plasmado en el ordenamiento procesal penal y requiere de la discusión de las pruebas de acuerdo a las posturas que asumen la parte investigada, la víctima y el Estado, sobre ello opina Ortells Ramos (1997), quien en su libro: *Proceso Penal Abreviado (Nuevo Estudio)*, aun cuando considera que la fase intermedia carece de contenido determinado, señala que: “es el conjunto de actos que tienen por función revisar si la instrucción previa está completa y resolver sobre la procedencia de la apertura del juicio oral” (pág. 120). Por ello se puede considerar la importancia de esta etapa dada su

incidencia en la decisión de iniciar el proceso penal propiamente dicho, siendo así, resulta de harto interés el cuidado que se ha de tener para conseguir que las pruebas que se recojan cumplan con las garantías debidas y evitar que para el caso de las declaraciones previas del imputado en caso no sean revisadas adecuadamente y no se postulen por el Fiscal, debieran omitirse respecto a su valoración en juicio oral.

En cuanto a lo referente a la temporalidad para el desarrollo de esta etapa, no se ha establecido con exactitud su duración, en ese sentido se entiende que dependerá de cuanto duren las diligencias que se puedan actuar, a las audiencias de control de acusación o sobreseimiento, a la complejidad del caso, a los planteamientos que se puedan hacer sobre los medios de defensa, a la prueba anticipada, si fuera el caso. Por tanto, el plazo será el necesario y dependerá de la dirección judicial con intervención de las partes, con observancia al principio de celeridad procesal.

2.1.1. Etapa de Juzgamiento

Habiéndose alcanzado el saneamiento del proceso respecto a la revisión de las pruebas que permitan el acercamiento a la certeza de la responsabilidad de la acción ilícita, es el momento en que el proceso se torna hacia la etapa de juzgamiento la misma que está constituida por los actos preparatorios, la realización del juicio oral y culmina con la expedición de la sentencia sobre el proceso penal. La parte central es el juicio oral, espacio procesal en donde las partes habiendo asumido posiciones contrarias debaten sobre la prueba en busca de convencer al juzgador sobre la inocencia o culpabilidad del acusado; es precisamente en esta etapa en la cual se pretende asegurar el correcto desempeño de la prueba considerada como declaración del imputado, en tanto este haya hecho uso de su derecho a guardar silencio.

Tal circunstancia de actuación debe estar comprendida bajo los requisitos que se contemplan como principios de esta etapa, así se tiene pues a la oralidad, publicidad, inmediación y la contradicción en la actuación probatoria; de igual modo son de observancia los principios de continuidad del juzgamiento, concentración de los actos del juicio, identidad física del juzgador y presencia obligatoria del imputado y su defensor. Dándose inicio con el auto de citación a juicio (art. 355) que es la resolución judicial que contiene el lugar donde se realizará el juicio oral, cuya fecha será la más próxima posible con un intervalo no menor de diez (10) días.

En esta fase se ubica una suerte de revisión a través del interrogatorio de los testigos que la propia parte presenta a fin de desarrollar el relato que permita comprobar las proposiciones fácticas y el éxito de la teoría del caso. Se busca extraer de las declaraciones la información necesaria para construir la historia o parte de la misma, es en este momento cuando el imputado puede hacer uso a su derecho a guardar silencio bajo el principio de no autoincriminación.

Para Julio Fontanet Maldonado, quien es citado por Pedro Angulo Arana (2008), en su libro: *El Interrogatorio de Testigos en el Nuevo Proceso Penal*, nos menciona que: “el interrogatorio directo es aquel que efectúa el abogado que presenta al testigo, con el propósito de establecer y aportar prueba sobre alguna de sus alegaciones” (pág. 47).

Asimismo, Julio Fontanet Maldonado (2000), en su libro: *Principios y Técnicas de la Práctica Forense*, nos expresa que: “el interrogatorio directo requiere la preparación previa para el examen del testigo, resultando de utilidad escuchar de ellos todo cuanto tienen que decir sobre el caso y además explicarles la importancia de su testimonio” (pág. 2).

El mismo Julio Fontanet Maldonado (2000) ha identificado diez reglas o mandamientos para tener en cuenta en los casos de interrogatorio directo:

1. Acreditación del testigo, a fin de que el juez conozca quien es el testigo, formulando preguntas a fin de saber su nombre, profesión u oficio, estado civil, familia, religión, principalmente.
2. Sencillez en la formulación de las preguntas como en las respuestas del testigo. En tal sentido, las preguntas y respuestas deben ser concretas, puntuales, claras y de fácil comprensión, tratando de simplificar el testimonio pericial y evitando preguntas extensas o compuestas, así como el empleo de las conjunciones (“y” “o”).
3. Utiliza preguntas de transición y orientación, que ayudan al testigo a recordar y reconstruir su testimonio, así como ayuda al juez en el proceso mental de recordar y entender el interrogatorio directo.
4. Descripción de los lugares donde han acontecido los hechos que puede ser desconocido para el juzgador, permitiéndole una mejor ubicación del lugar donde ocurrieron los hechos que dan lugar al juicio.
5. Controlar el ritmo del examen directo, porque el testimonio del declarante debe ser escuchado con detenimiento por el juez; si es ameno o interesante seguro que será atendido por el juez. Es obligación del defensor lograr el ritmo adecuado del examen abarcando los aspectos del testimonio que le son útiles, sin apresuramientos; salvo que lo que diga el testigo puede ser perjudicial, en cuyo caso podrá agilizar el ritmo del examen directo.
6. No hacer preguntas sugestivas, que es aquella que hace una aseveración en la cual el testigo acepta o rechaza la misma. Estas preguntas revelan una mala preparación del caso.

7. ¿Anunciar debilidades? ¿El autor se pregunta si se deberá presentar la evidencia adversa de un testigo durante el interrogatorio directo? Y sostiene que se deberá hacer si se sabe que la parte contraria lo presentará durante su contrainterrogatorio o en su turno de prueba.
8. Escuchar la respuesta de los testigos prestándole la atención del caso, incluso invitándolo a que suba el tono de su voz si responde con voz muy baja. También abogado le puede solicitar al testigo que hable más pausadamente y que trate de hablar con claridad. La atención a las respuestas del testigo es importante también para sustentar posición respecto de las objeciones o la reformulación de su pregunta.
9. La posición del abogado es parecida a la de un director en el examen directo, pero sin quitarle la atención al testigo. El abogado debe tener un formulario, bosquejo o esquema de lo que va a preguntar, no siendo aconsejable tener escritas todas las preguntas que se harán a un testigo.
10. El interrogatorio debe ser organizado, debe seguir un orden cronológico, desde el inicio de los hechos a fin de destacar los aspectos medulares del testimonio incluyéndose al final el reconocimiento o no de la persona acusada (pág. 4).

2.1. Derecho a Guardar Silencio

La concepción garantista del derecho penal tiene injerencia directa en el sistema procesal penal en tanto que existen principios procesales que han de respetarse en el desarrollo de la investigación, atendiendo al esquema del debido proceso; es en este contexto que surge el derecho a guardar silencio, entendido ya como un derecho

fundamental del procesado por los diferentes instrumentos internacionales tanto en materia de derechos humanos como en materia del derecho penal internacional. Incluso, ha tenido mayor protección por medio del derecho a la no autoincriminación, derecho del cual se deriva, que en materia de estándares internacionales ha implicado el amparo directo al derecho a guardar silencio sin que aquella actuación implique cualquier tipo de indicio en contra del procesado.

Siendo así se puede denotar la importancia de la garantía procesal respecto a la no autoincriminación del imputado, lo cual es refrendado incluso en el derecho convencional, tal cual lo refiere el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia¹, el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda², el Estatuto de la Corte Penal Internacional (ECPI)³, la Convención Americana de Derechos Humanos⁴ y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos⁵ hacen referencia a dicho presupuesto como base sólida del derecho fundamental al debido proceso.

Se trata entonces de generar resguardo de los intereses del imputado, desde luego que esta posición tiene muchos detractores que opinan en forma contraria a la aplicación

¹ Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia, artículo 21: “Derechos del acusado (...) 4. Toda persona contra la cual pese una acusación en virtud del presente Estatuto tiene derecho, en uso del principio de plena igualdad, de al menos las siguientes garantías: (...) g) De no ser forzada a testimoniar en contra de sí misma o de declararse culpable”.

² Estatuto del Tribunal Penal Internacional de Ruanda, artículo 20: “Derechos del acusado (...) 4. Toda persona contra la cual pese una acusación en virtud del presente Estatuto tiene derecho, en uso del principio de plena igualdad, de al menos las siguientes garantías: (...) g) A no ser obligada a testimoniar en contra de sí misma o declararse culpable”.

³ Estatuto de la Corte Penal Internacional, artículo 55: “Derechos de las personas durante la investigación. 1. En las investigaciones realizadas de conformidad con el presente Estatuto: a) Nadie será obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable (...)”.

⁴ Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 8: “Garantías judiciales. (...) 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (...) g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable (...)”.

⁵ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14: “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (...) g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable”.

de esta directriz, que niegan el derecho a la no autoincriminación obviando su relación con el derecho a guardar silencio.

Es importante también tener en cuenta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) refiere sobre el derecho a guardar silencio, respecto del proceso de interrogatorios, y el derecho a la no autoincriminación, que son estándares internacionales de reconocimiento general y que su base fundamental resulta ser el derecho al debido proceso; considera además que tiene un carácter de derecho absoluto, puesto que el derecho a guardar silencio del acusado bajo ninguna circunstancia deberá ser usado en su contra en juicio.

Luego el hecho de que se le informe previamente al acusado respecto de una posible consecuencia negativa derivada de su silencio, dicha advertencia es “mal vista” bajo los estándares internacionales, ello no podrá ser causal de acusación; así en la realidad nacional el Código Procesal Penal 2004, establece en su artículo 376° Declaración del Acusado.- 1. Si el acusado rehúsa declarar total o parcialmente, el Juez le advertirá que, aunque no declare el juicio continuará, y se leerán sus anteriores declaraciones prestadas ante el Fiscal.

Esta es precisamente la circunstancia legislativa que se observa como el problema central de la investigación, inconstitucionalidad que dependerá de cuan apropiada sea la regla para garantizar el debido proceso y el cumplimiento de las garantías, amparadas en los derechos humanos, puesto que se consideran atentatorios los criterios que conllevan a que las declaraciones prestadas por el imputado en la instrucción, o las declaraciones prestadas ante el Fiscal, sean contempladas sin previa postulación, alterando los principios básicos de la etapa de juzgamiento y del proceso penal; más aún teniendo en cuenta que el derecho a guardar silencio existe desde el primer momento en que el

imputado es detenido o citado, por lo que la posibilidad de que se lean sus declaraciones prestadas ante el Fiscal puede ser inexistente, ello es preciso de revisar desde la perspectiva constitucional a fin de que se establezca la viabilidad de la regla bajo crítica o si se ha de requerir algún tipo de reformulación.

Para traer un poco de concepción internacional como derecho comparado, se ha de considerar lo reseñado por Cafferata Nores (2004), en su libro: *Manual de Derecho Procesal Penal*, señala que: “el derecho a guardar silencio se origina en el principio de inocencia, ya que este le permite al imputado ejercer [...] un comportamiento procesal pasivo (no hacer, no colaborar, no declarar, no probar), [...] (pág. 263). Agrega, asimismo, que el derecho a guardar silencio es: “el acto predispuesto por la ley procesal penal para darle al imputado la oportunidad de ejercer su defensa material, frente al hecho que se le atribuye y que se la ha dado a conocer, junto con las pruebas existentes, en forma previa y detallada” (pág. 263).

La importancia del desarrollo de un proceso penal cubierto de garantías es otorgar seguridad jurídica y con ello lograr confianza en el sistema penal alcanzando el control social que se supone es la finalidad del mismo, por ello es que debe comprenderse que en el desarrollo de la investigación la declaración del imputado está dirigida hacia su defensa; por lo mismo que advertir sobre el derecho a guardar silencio es un presupuesto esencial para el ejercicio del ius tacendi, en tanto que, cumpliendo una función informativa, va a permitir la elección del tipo del comportamiento.

De otro lado, se comprende al derecho a guardar silencio como un ejercicio de la autodefensa del inculpado, que funciona con la decisión de permanecer en silencio, no contestando a alguna o a todas las preguntas que se le formulen, pero al mismo tiempo podrá proponer la práctica de pruebas de descargo tendentes a hacer desaparecer la

sospecha de la comisión del hecho punible que pesa sobre él y que tiene además un carácter sucesivo, esto es cada vez que sea llamado a declarar podrá hacer uso de este derecho.

2.1. El juzgamiento y la valoración de la Declaración del Imputado como Prueba en el Juzgamiento

El eje central de la investigación es el hecho de que se advierte en el ejercicio común de los procesos, la participación de la valoración como prueba de las declaraciones previas del imputado, lo cual se reconoce como una acción que se aleja de la constitucionalidad del proceso penal, siendo así resulta necesario atender a esta aseveración con el fin de reconocer cuán adecuada es la forma en que se ejecuta; siendo así, se habrá de considerar el sentido de la prueba en el juicio, por lo mismo que se toman las palabras de Ferrer (2005), en su libro: *Prueba y Verdad en el Derecho*, cuando hablamos de la prueba en el sentido de medio probatorio «nos referimos a los medios mediante los que se aportan o se pueden aportar elementos de juicio a favor de una determinada conclusión» (pág. 27). Por tanto, si empezamos a desmenuzar el conjunto de derechos que estarían implicados en el derecho al silencio, podríamos decir que éste, en el sentido de prueba como medio probatorio, estaría relacionado con la confesión y los métodos usados para lograr obtener información del acusado dentro del proceso.

Por otro lado, Ferrer (2005), también menciona que podemos hablar de la prueba para referir « la actividad consistente en la aportación de elementos de juicio a favor de una determinada conclusión o a la fase o procedimiento del proceso judicial en el que se realiza esa actividad» (pág. 28). Por lo mismo que el sentido de hablar de prueba respecto

al derecho a guardar silencio, se puede comprender a la decisión de sólo contestar aquello que lo favorece y negarse a decir sobre aquello que lo incrimina.

Siendo así es importante también tener en cuenta lo señalado por Ferrer (2005), expresa que: «se hace referencia al resultado producido por la aportación de elementos de juicio con relación a la confirmación o falsificación de una determinada hipótesis acerca de los hechos» (pág. 28). En relación a la prueba como resultado, y teniendo en cuenta los dos núcleos comentados anteriormente, entenderíamos que sobre el derecho al silencio puede pensarse, a modo de ejemplo, la valoración del silencio o las inferencias que a partir de éste puede hacer el juez.

En palabras de Germán Sucar (2012), quien en su libro: *Los Fundamentos Jurídicos del Derecho al Silencio*, expresa que: “el imputado o acusado también tiene derecho a que los órganos de acusación (parte querellante o ministerio público) o de juzgamiento no puedan alegar o extraer consecuencias desfavorables o ponderar negativamente su silencio en sus requerimientos o decisiones” (pág. 9).

De todo lo recopilado se puede rescatar el hecho de que guardar silencio se convierte en una herramienta de defensa del imputado, la misma que atiende a la orientación de los principios garantistas que dirigen el proceso penal basado en las recomendaciones de los instrumentos de derecho internacional, por lo mismo que se debe cumplir con la precisión del caso en su ejecución, liberando la posibilidad de su uso sin condicionamientos de por medio como el que existe en la actualidad.

2.1.1. La Valoración del Derecho a Guardar Silencio.

Habida cuenta que el derecho a guardar silencio es un precepto fundamental, debe tratarse bajo esa condición en el proceso penal, en ese sentido estaría asegurada además la garantía de la presunción de inocencia, por lo mismo que el ejercicio de este derecho no debería ser motivo par tomar acciones en contra del imputado desde otras perspectivas, como es el caso de la advertencia de ciertas consecuencias en el caso.

Por lo anteriormente dicho se puede referenciar la circunstancia de la valoración del silencio del imputado que esta relacionado en función a cuestiones de costumbre el hecho de que se considere como una auto acusación el hecho de callar ante la imputación de una acción; puesto que para la lógica jurídica no aplica el argumento de que quien calla es porque acepta la responsabilidad, aforismo común pero que no encaja en el esquema de la garantía penal.

Por lo mismo que la valoración del silencio del imputado en el juicio oral debe ser de una forma directa, sin mayor complicación relacionada con el hecho del interrogatorio, esto es si el imputado esta en el derecho de contestar aquellas preguntas que sirven para su defensa y se niega a contestar aquellas que tienen que ver con su inculpación, esta última acción no debe ser comprendida como una acusación a si mismo, puesto que sólo se trata del ejercicio de su derecho a callar, la conminación a una respuesta devendría en un acto inconstitucional porque altera el sentido del principio; por lo mismo la valoración del silencio para ser usado como elemento justificante de la acusación también carece de esta característica de constitucionalidad.

En este sentido, Nieva Penoll (2010), en su libro: *La Valoración de la Prueba*, considera que: “valorar el silencio del imputado como un elemento en el que poder basar su culpabilidad supondría convertirle en un simple objeto del proceso penal” (pág. 253),

lo cual resulta contrario al sistema acusatorio en el que se enmarca el actual ordenamiento procesal penal español y lo asemejaría a los tiempos en que imperaban los postulados del modelo inquisitivo.

En consecuencia, a pesar de que el legislador peruano ha introducido en el Código Procesal 2004, un precepto que prohíbe la consideración del silencio del imputado como indicio, intentando así reforzar en gran medida las garantías del sujeto pasivo dentro del proceso penal. La realidad, es que lo cual en un medio análisis resulta una perta abierta a la contaminación subjetiva del juzgador.

Es preciso señalar que esta consideración esta diseminada en diversas legislaciones procesales a nivel internacional, así el derecho comparado permite indicar que el artículo 298° del Código argentino dispone que el Juez ha de informar el imputado de que puede abstenerse de declarar, sin que su silencio implique una presunción de culpabilidad. El artículo 330° del Código venezolano, que el Juez advertirá al acusado que puede abstenerse de declarar sin que su silencio le perjudique. El artículo 81° del Código guatemalteco, que la decisión del imputado de guardar silencio no puede ser utilizada en su perjuicio. El artículo 92° del Código costarricense, que “antes de comenzar la declaración se advertirá al imputado que puede abstenerse de declarar sobre los hechos, sin que su silencio le perjudique o en nada le afecte”. Y en el caso del Perú, el artículo 8.2. g) de la Convención Americana de Derechos Humanos, al reconocer el derecho del acusado a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, derogó el artículo 127° del antiguo Código de Procedimientos Penales de 1940, que sancionaba el silencio del imputado como un indicio de culpabilidad, y ahora el artículo 87.2 del Código Procesal Penal de 2004 establece que antes de comenzar la declaración del imputado “se le advertirá que tiene derecho a abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio”.

Por todo lo expuesto, rechazamos que el silencio del imputado o acusado pueda ser tenido en cuenta y valorado como indicio de culpabilidad por el Juez sentenciador. Una decisión de estas características habría de ser calificada como prueba prohibida. Y ello porque valorar el silencio del sujeto pasivo en perjuicio suyo implicaría restringir tanto el ámbito de protección y contenido del derecho fundamental a la autodefensa, que llegaría a perder su finalidad.

Foschini (1956), en su libro: *El Imputado*, distingue tres supuestos:

cuando la negativa a declarar obedece sólo a motivos procesales
tiene un valor probatorio absolutamente neutro a los efectos de determinar
la mayor o menor capacidad de delinquir del imputado;

cuando ante la concurrencia de otros elementos de prueba que
excluyan cualquier razón de la negativa del imputado a declarar, éste
persista en su obstinación a no declarar, habiendo sido informado de la
inutilidad y lo ilógico de su comportamiento, su silencio puede ser
considerado un dato de mayor capacidad del sujeto para delinquir; y,

cuando la negativa a declarar se deba a una vergüenza del imputado
a reconocerse autor del delito, al carácter reservado del imputado o a la
incomprensión de lo que está ocurriendo, su silencio puede ser considerado
como un dato de su menor capacidad para delinquir (pág. 108).

Resulta interesante observar el planteamiento del autor que si bien es cierto hace referencia a un aspecto relacionado con la conducta interna del imputado, es decir que se

pretende calificar la valoración del silencio del imputado o su negativa a declarar, para llegar a calificar la capacidad del mismo respecto a la disposición que tiene o tuvo para cometer el delito.

En ese sentido se asume que también se está considerando una valoración que no obedece a la estructura lógica jurídica del proceso penal, puesto que el debido proceso debe acudir al mismo para dotar de seguridad jurídica, y el resquebrajamiento de las garantías que supone el proceso debe ser tratada como tal, el respecto irrestricto sin condicionamientos previos a fin de provocar la participación mediante su declaración.

Ante esta situación José María Asencio Mellado (2008), en su libro: *La Prueba Prohibida y Prueba Preconstituida en el Proceso Penal*, nos expresa que la doctrina plantea dos soluciones. Por un lado, considerar que pueden ser objeto de valoración en sentencia tanto las respuestas del imputado o como las lagunas o evasivas con las que contesten, es decir, el silencio. Por otro lado, entender que sólo pueden valorarse sus respuestas expresas, haciendo caso omiso a las preguntas a las que no haya querido responder (pág. 194).

La primera teoría se basa en que el sujeto pasivo del proceso, una vez que decide someterse, aunque sea parcialmente, al interrogatorio, está consintiendo en que su declaración sea utilizada como medio de prueba. Y no es esta una idea desacertada, más bien todo lo contrario, pues el imputado, cuando contesta a algunas de las preguntas que se le formulan por los intervinientes en el interrogatorio, acepta colaborar con la justicia en la investigación de los hechos que indiciariamente se le atribuyen.

Según la intención de esta investigación se ha de tener en cuenta entonces la segunda postura, pues entendemos que ésta es la más coherente con los principios constitucionales inherentes a la defensa y con el derecho fundamental al silencio. En

resumen, tal y como opina el profesor César San Martín Castro (2003), en su libro: *Derecho Procesal Penal*, el acusado podrá dejar de contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen, sin que el juez o tribunal pueda extraer de dicha actitud ningún efecto (pág. 833).

2.1.1. Derecho a Guardar Silencio en las Etapas del Proceso Penal

El inicio de la descripción de este derecho y su actuación en las diferentes etapas del proceso penal ha de iniciar por la primera de ellas como es el caso de las declaraciones que se dan a nivel policial, en la que sin duda el imputado correrá mayor riesgo de la autoincriminación sugerida y que puede atentar contra su derecho a la defensa, así será importante tener en cuenta lo señalado por González Jiménez (2014), en su libro: *Las Diligencias Policiales y su Valor Probatorio*, nos menciona que:

Incluso dentro de la fase investigadora es posible que el imputado elija guardar silencio en su interrogatorio en sede policial, pero declarar una vez sea puesto a disposición judicial ante el Juez de Instrucción. Hecho éste que suele suceder con frecuencia, habida cuenta la probabilidad mayor de que se vulneren los derechos fundamentales del imputado en sede policial que en la judicial (pág. 143).

Razón ésta que provoca que los letrados aconsejen a sus clientes guardar silencio y no responder a las preguntas que les formulan los agentes de policía.

La realidad del peligro es tal que varios Códigos Procesales Penales latinoamericanos prohíben a la policía tomar declaración al imputado. Entre ellos cabe citar el artículo 184.10 del Código argentino, según el cual los funcionarios de la policía

no podrán recibir declaración al imputado, sino que únicamente podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad, previa lectura que en ese caso se le dará en alta voz de los derechos y garantías establecidos en su favor por las normas rituales. Y la sanción por incumplimiento de este precepto es la nulidad absoluta de la declaración, apreciable de oficio en cualquier estado del proceso. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 103° del Código Procesal Penal de la República Dominicana y el artículo 88° del Código Procesal Penal de Guatemala.

Pero volviendo al tema que nos ocupa, en el caso de que acusado haya guardado silencio en la fase de investigación, pero decida declarar ante el Juez en el plenario, no se plantea problema alguno. Sólo lo manifestado en el juicio oral podrá tenerse en cuenta en la resolución que en su día recaiga, sin que sea posible extraer conclusión alguna de su silencio previo, pues las razones que llevaron al imputado a no manifestar nada durante la instrucción de la causa pudieron ser diversas y, en todo caso, su decisión la tomó amparándose en su derecho fundamental a permanecer en silencio y a no colaborar.

En cambio, mayores problemas plantea el supuesto de que el imputado haya declarado durante la etapa de investigación, pero se niegue a hacerlo en el juicio oral.

El doctor Agustín Jesús Pérez–Cruz Martín (2011), en su libro: *El Interrogatorio del Acusado. Reflexiones a la Luz de la Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo*, sostiene que:

No afecta a ningún derecho fundamental valorar en sentencia la declaración del imputado prestada en el sumario cuando éste haya decidido guardar silencio en el juicio oral y ello porque cada declaración del imputado/acusado tiene carácter independiente. Con este fin, entiende que, aunque el imputado hubiera hecho uso de su derecho al silencio en el

plenario, en éste se puede dar lectura, a instancia de cualquiera de las partes, a las manifestaciones incriminatorias que realizó durante la fase de instrucción (pág. 131).

Al parecer aquí se esta confundiendo dos situaciones diferentes. Por un lado, el imputado o acusado que declaró en la etapa investigatoria, pero guarda silencio en el juicio oral y, por otro lado, el imputado o acusado que declara en ambas etapas del proceso y de la comparación entre sus manifestaciones anteriores y posteriores resultan contradicciones.

Es interesante también la revisión de la postura que adopta Ramos Méndez (2016), quien en su libro: *Enjuiciamiento Criminal*, nos dice que: la voluntad del imputado de declarar, que supone reconocer su disponibilidad para ser utilizado como medio de prueba, no le obliga a nada más que a decir lo que quiera, aunque no sea verdad (pág. 301).

De igual modo se debe tener en cuenta lo señalado por Jacobo López Barja de Quiroga (2004), en su libro: *El Derecho a Guardar Silencio y a No Incriminarse*, considera que: debe reconocerse la existencia de un derecho a mentir, ya que en caso contrario se estaría mermando considerablemente la capacidad de defensa del imputado, así como el contenido del derecho al silencio y del derecho a no incriminarse (pág. 594).

Huertas Martín (1999), en su libro: *El Sujeto Pasivo del Proceso Penal como Objeto de Prueba*, defiende que: si bien el Tribunal Supremo, en muchas ocasiones, ha valorado negativamente la declaración mendaz del imputado debe reconocerse un derecho a la falsedad (pág. 306).

Pese a la existencia de contradicciones en las declaraciones del imputado, la lectura de la declaración sumarial sólo debería servir para evidenciar dicha contradicción, y nunca para motivar una sentencia condenatoria; así el acta que da cuenta de la declaración previa del imputado no debe ser admitida como elemento de prueba para el juicio. Ello así, no porque su admisibilidad pueda generar una violación al derecho a no declarar en contra de uno mismo, sino porque se trata de prueba indebidamente perjudicial, que puede generar un prejuicio en el juzgador, mayor a su valor probatorio.

CAPITULO III

LA ORALIZACIÓN DE LAS DECLARACIONES PREVIAS EN JUICIO ORAL

La estructura del proceso penal, tal cual se ha revisado en el capítulo anterior esta compuesto por reglas que propenden la ejecución de la investigación bajo el parámetro de constitucionalidad que ampara a toda acción del ius puniendi del Estado, destinado a que el mismo se constituya como una herramienta útil para el ejercicio del control social que tiene a su cargo.

Para el cumplimiento de tal objetivo se han incorporado al Código diversos principios procesales que deben regir el desarrollo del proceso, así como una serie de medidas y mecanismos que hagan más efectiva la ejecución de las sentencias.

3.1. La valoración de las declaraciones previas en función al indicio de Culpabilidad

Siendo el caso específico del problema orientado a la determinación de la culpabilidad en razón de la valoración de las declaraciones previas del imputado en la etapa de juicio oral aun cuando este haya hecho uso de su derecho a guardar silencio, será preciso hablar de la culpabilidad desde su reconocimiento como indicio; entendido esto como aquella presunción judicial, de hombre, o indicio, es la deducción que por vía de inferencia obtiene el juez, en virtud del enlace de ciertos hechos con el que se trata de probar. El Código en el artículo 229° lo define diciendo que: "Se entiende por indicio un hecho del que se infiere lógicamente la existencia de otro hecho".

El juez obtiene como resultado el razonamiento del indicio en base a una inferencia, esto es el enlace que se forma sobre ciertos hechos conocidos, los cuales utiliza para inferir nuevos hechos. En cuanto a nuestro planteamiento es necesario evaluar cómo es que la oralización de las declaraciones previas en juicio oral, ante la negativa del imputado de declarar, pueda servir como medio probatorio suficiente que evidencie un indicio de culpabilidad en el agente del hecho delictivo.

Piero Calamandrei (1956), en su obra titulada: *Elogio de los Jueces Escrito por un Abogado*, manifiesta que:

Esa gravedad del indicio también se puede considerar desde el punto de vista de su eficacia probatoria, como cuando está purificado de toda falsificación y engaño, que no sea obra de la casualidad o del azar, que no sea susceptible de contra indicios que puedan eliminar o disminuir su fuerza probatoria. En síntesis, que cuando después de haber podido superar todos los interrogantes que en contrario se pueda hacer el juzgador, éste llegue a una conclusión de tranquilizante seguridad en sus decisiones, fundada en la certeza moral a que hubiere llegado, plenamente convencido de haber procedido según los dictados del derecho, los postulados de la justicia y la voz de su conciencia (pág. 357).

Es importante entonces la participación de este tipo de indicio puesto que respecto a la responsabilidad del imputado hace que el juez sea orientado a resolver un caso concreto fundado en la certeza moral, además que esté convencido que su actuación y más aún su decisión se ajusta a derecho, y sobre todo que esta consecuencia debe ir relacionada con la percepción del juez probo, idóneo, que tiene la capacidad de establecer razonamientos lógicos, jurídicos y justos.

Bajo el entendido caso de que la culpabilidad resulta ser el reproche que se atribuye al autor de un hecho delictivo, quien pese a su capacidad de decisión o autodeterminación ha optado deliberadamente en actuar de forma antijurídica; es momento de analizar la posibilidad de que la oralización de las declaraciones previas del imputado, en el caso de que éste haya decidido no declarar en juicio oral, pueda conllevar a sumir un indicio de culpabilidad del imputado, lo cual carecería de la lógica suficiente, puesto que se trata de un nivel subjetivo de interpretación de la acción del inculcado, lo cual no se puede establecer con exactitud.

Para esclarecer el nivel de aceptación de este tipo de razonamiento es que se deben tener en cuenta ciertos principios respecto a la inaplicación resulta necesario demostrar la derrotabilidad de la norma, y para ello, debe evidenciarse, que la lectura de la declaración del imputado en juicio, constituye una admisión coactiva de culpabilidad; sirviendo para ello la teoría de la admisión en primer lugar, según la cual la declaración se presta ante el Fiscal y Abogado defensor, por lo cual es imposible hablar de ilicitud en su obtención, luego su actuación como lectura no la convierte en ilícita, aún con un contenido de confesión.

Luego se puede ensayar otra posición que se denominaría la exclusión como teoría, así cuando el imputado hace uso del derecho a guardar silencio no podrá ser obligado a declarar en razón de la lectura de declaración previa, puesto que esto sería obligarlo a confesar.

Siguiendo a Caferata, se puede advertir una suerte de permisibilidad, según lo manifestado mediante:

(...) la doctrina casatoria ha señalado la conexión entre el principio de inocencia con el derecho de defensa, pues proporciona a éste su

verdadero sentido, de modo que no se podrá utilizar como presunción de culpabilidad en su contra, ni como circunstancia agravante para la individualización de la pena que se le pudiere imponer, artículo 41° C.P., que el imputado se abstenga de declarar, o que al hacerlo mienta, o el modo en que ejerza su defensa. (Cafferata Nores, 2004, págs. 10-11)

El reconocimiento del indicio de culpabilidad como herramienta para derrotar el principio de presunción de inocencia ante la negativa a declarar por parte del imputado no resulta un razonamiento jurídicamente adecuado, puesto que ante la presentación de la situación que el imputado se niegue a declarar o en el peor de los casos éste mienta al emitir su declaración, no constituyen tales circunstancias más que el ejercicio del derecho de defensa; en tal sentido, al presentarse tales situaciones no serán motivos para enervar la presunción o el indicio de culpabilidad.

En este sentido se puede advertir que la lectura u oralización de las declaraciones previas del imputado vulnera la presunción de inocencia; puesto que vendría finalmente a vulnerar el derecho que tiene el imputado a abstenerse a declarar; situación que a la postre significa encaminarlo a la auto incriminación, alterando el sentido garantista del derecho penal y del proceso en si.

Ello es así porque resultaría arbitrario e ilegal que las manifestaciones defensivas del imputado, por el solo hecho de no haber sido avaladas por la prueba del proceso, puedan ser utilizadas en su perjuicio, pues tal razonamiento importaría una fuerte desnaturalización de su derecho de defensa material ya que, si cada vez que las expresiones del imputado negando su culpabilidad o los hechos fundantes de la imputación en su contra no fueran admitidas como verdaderas, se pudieran

transformar -por su presunta mendacidad- en prueba de cargo en su contra, el derecho de defensa quedaría reducido a decir cosas verdaderas, cuya veracidad además el acusado debería probar, so pena de que, en caso contrario, se las considere mentirosas, y por ende prueba de culpabilidad en su contra, carga probatoria que vulneraría el principio de inocencia constitucionalmente reconocido a su favor. (Cafferata Nores, 2004, págs. 11-12)

Es preciso notar la intervención del derecho a la defensa como un elemento más para el análisis; el mismo que está en función a que las declaraciones pueden, ante determinadas circunstancias, enervar la presunción de inocencia, situación que no es cuestionada; pero lo que sí es preocupante es hasta qué sentido las declaraciones puedan significar fundamentar la culpabilidad del sujeto activo del delito, como bien lo dice el autor, ante la incredulidad del operador jurídico de no tomar por cierto una declaración basada en la negación de la responsabilidad penal, pueda significar la vulneración al principio de presunción de inocencia, dentro del marco del principio de culpabilidad.

De este modo, el imputado quedaría avisado antes de decidir si declara o se abstiene de hacerlo, sobre las consecuencias perjudiciales para su situación procesal que podrían derivarse de optar por declarar y hacerlo mendazmente para defenderse de la imputación que se le formula. Y se le evitaría la sorpresa de encontrarse con que, la invitación judicial a exponer “todo lo que crea conveniente en descargo o aclaración de los hechos” (artículo 262° CPP), esconde la posibilidad de ser víctima de una “puñalada procesalmente trapera”: si al exponer cree conveniente mentir, esta mendacidad puede ser utilizada como una prueba de cargo en su contra

(limitación a su libertad de declarar de la que no había sido previamente informado). (Cafferata Nores, 2004, pág. 17)

Ante la simple lectura de una declaración resulta difícil saber hasta qué punto el imputado puede mentir en su declaración, pues para realizar correctamente este análisis es necesario que el imputado declare en el mismo juicio oral, pues solo así el juez, con ayuda del principio de inmediación podrá analizar cada palabra, cada gesto, entre otras situaciones que revelarían la veracidad o falsedad de las declaraciones del imputado; por lo mismo que la ausencia de la declaración en el juicio oral hace imposible la comparación de las declaraciones, siendo así resulta incorrecto la consideración o valoración de dichas declaraciones del imputado para sentar convicción de la imputación en la sentencia.

3.2. El Debido Proceso como garantía de seguridad jurídica

El proceso penal en su totalidad debe estar revestido de la contemplación de principios procesales que permitan hacer coincidir a dicha regla con la norma suprema, por ello la constitucionalización del proceso implica asegurar el bienestar de las partes en paridad buscando que el control social se ejerza en equilibrio de condiciones, por lo mismo que se el debido proceso es una herramienta de medición de dicho control y que la ejecución de todas estas condiciones que incorpora permita dotar de seguridad jurídica al proceso penal.

Toda la estructura que incorpora el debido proceso en tanto garantías a través de principios, buscan optimizar la aplicación del derecho penal en el proceso mismo, por lo cual la forma en que se logra esta coerción estatal es a través de la consideración de

directrices que pautan las características de la investigación y que a continuación se detallan.

3.2.1. Imparcialidad del Juez

Lo que se entiende como imparcialidad obedece hasta a dos aspectos uno o relacionado con el criterio subjetivo y otro referido a la subjetividad que como ser humano le corresponde al Juez, aun teniendo en cuenta la condición de probidad e idoneidad, por ello se tiene en cuenta lo señalado por la investigadora Capurso (2004), en su libro: *La Imparcialidad del Juzgador. Suplementos de Administración de Justicia y Reformas Judiciales*, nos manifiesta que:

Epistemológicamente, tenemos que: "la palabra "imparcial" se encuentra definida en el diccionario como: "que juzga o precede con imparcialidad; que incluye o denota imparcialidad. También como recto, justa y equitativo". Por su parte, el vocablo "imparcialidad" está definido como "carácter de imparcial: el primer deber de un magistrado es la imparcialidad" (pág. 17).

La concepción del Juez debe ser siempre tenida en el máximo de los niveles o categorías, puesto que de su acción jurisdiccional depende el destino de seres humanos respecto a la limitación de uno de sus principales derechos, la libertad, por lo cual la imparcialidad está relacionada con los conceptos de rectitud, justicia y equidad, como pilares máximos que deben caracterizar a un órgano jurisdiccional, dentro de los parámetros del debido proceso. La imparcialidad implica, necesariamente la ausencia de

designio o de prevención en el juez de poner su función jurisdiccional al servicio del interés particular de una de las partes.

Al respecto, Montero Aroca (2006), en su artículo: *Derecho a la Imparcialidad Judicial*, nos expresa que:

La función jurisdiccional consiste en la tutela de los derechos e intereses legítimos de las personas por medio de la aplicación del Derecho en el caso concreto, y la imparcialidad se quiebra cuando el juez tiene el designio o la prevención de no cumplir realmente con esa función, sino que, incumpliendo con ella, puede perseguir en un caso concreto servir a una de las partes (pág. 69).

Es función del Estado tutelar los derechos e intereses, por lo cual se traslada esta responsabilidad a la función jurisdiccional, lo cual se realiza mediante la aplicación del Derecho en el caso concreto, y la imparcialidad se quiebra cuando el juez tiene el designio o la prevención de no cumplir realmente con esa función, sino que, incumpliendo con ella, puede perseguir en un caso concreto servir a una de las partes.

Luego el mismo autor en su libro titulado: *Imparcialidad o Incompatibilidad. Sobre la Imparcialidad del Juez y la Incompatibilidad de Funciones Procesales*, manifiesta que:

Esta garantía permite que el juez sea un tercero entre las partes, toda vez que resolverá la causa sin ningún tipo de interés en el resultado del proceso sea por una vinculación subjetiva con algunas de las partes o por alguna vinculación con los elementos de convicción del proceso que

hayan formado en su interior un pre juicio con respecto a la causa en concreto (Montero Aroca, 1998, pág. 332).

Aparece pues la imparcialidad del juzgador en el marco contextual del debido proceso, situación que estaría atentándose mediante la oralización de las declaraciones previas del imputado, tal situación devendrá en que el juez se forme un pre- juicio respecto de la causa en concreto, y lo que es peor aún, utilice tales declaraciones como un elemento para sustentar la culpabilidad del sujeto activo del delito, lo cual no se ajusta a la lógica jurídica del derecho.

Orlando Becerra Suarez (2013), en su publicación titulada: *El Derecho al Juez Imparcial*, expresa que: es en la esfera del derecho internacional de los derechos humanos donde se ha desarrollado la materia abundantemente. La imparcialidad del juez se manifiesta como una expresión del derecho humano al debido proceso (pág. 1).

La garantía del debido proceso opera desde una perspectiva internacional a través del derecho convencional mediante la protección de los derechos humanos, y luego desde una visión del derecho interno todo se origina en la Constitución Política, son los instrumentos jurídicos y los tribunales supranacionales los que han reconocido que la imparcialidad jurisdiccional se enuncia como exigencia derivada del debido proceso con el ánimo de asegurar la mayor objetividad posible frente al caso que se pone a disposición para el juzgamiento. La Declaración Universal de los derechos humanos, por su lado, expone: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisa que es una garantía fundamental del debido proceso, con la que se pretende

asegurar la objetividad del juzgador, por un lado, y de otro, inspirar la confianza necesaria de las partes, la que ha de extenderse a los ciudadanos de una comunidad democrática.

Específicamente, ha señalado que, el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial exige que “el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad”.

La imparcialidad del juzgador se erige como una de las garantías del debido proceso, es conveniente estudiar los dos tipos de esta característica, aportados por Neyra Flores (2010), en su publicación titulada: *Garantías en el Nuevo Proceso Penal Peruano*, a fin de analizar cómo es que se producen vulneraciones a tales manifestaciones de imparcialidad ante el supuesto factico de mi planteamiento:

Imparcialidad subjetiva: La imparcialidad subjetiva refiere a que el juez no debe tener ningún tipo de interés con el resultado a que pueda llegar el proceso para alguna de las partes, como puede ser que una de las partes sea un familiar suyo, o que sea su acreedor, o tenga algún tipo de enemistad, etc. ya que esto podría generar peligro de parcialidad en el juez.

Imparcialidad objetiva: La imparcialidad objetiva está referida a que el sistema judicial debe brindar las condiciones necesarias para evitar que el juez caiga en el vicio de la parcialidad, es decir que las normas que regulan su actuación deben de buscar que el juez no tenga prejuicios o favorezca a alguna parte sobre otra en base al contacto que ha tenido con la causa (pág. 8).

Se entiende nuevamente la división de estos aspectos considerados como subjetivo uno y objetivo el otro; el primero de ellos consiste en la imparcialidad subjetiva, basada ésta en la prohibición del juez de no tener ningún tipo de interés con el resultado del proceso, es decir que no tenga ningún interés con algunas de las partes, pues tal situación podría generar peligro de parcialidad en el juez.

El segundo aspecto de la imparcialidad se basa desde un ámbito objetivo, señalando que el juez no deba tener algún contacto con las causas; como sabemos existe restricción en que el juez tenga a la mano el expediente en el desarrollo de una audiencia, pues tal situación devendría en la generación de la parcialidad objetiva. Con respecto a nuestra formulación es importante tomar en cuenta este tipo de imparcialidad objetiva, pues notamos que ante el supuesto factico de que se oralizen las declaraciones previas del imputado, tal situación afecta la imparcialidad objetiva.

El Tribunal Constitucional, ha reconocido que el derecho al juez imparcial es un derecho fundamental implícito que se fundamenta a partir del principio de dignidad humana y del modelo de estado democrático de nuestro Estado, colocándolo de modo inmediato como una expresión del debido proceso. Dice: “el derecho a ser juzgado por jueces imparciales no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución. Ello, sin embargo, no ha impedido a este Tribunal reconocer en él a un derecho implícito que forma parte de un derecho expreso. A saber, del derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución”⁶.

Si bien es cierto que el derecho a un juez imparcial no está expresamente definido en nuestra constitución, de forma tácita se puede encontrar inmersa dentro de la garantía constitucional al debido proceso; el derecho a un juez imparcial tiene sustento también en

⁶ Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 6149 – 2006 – AA/TC, FJ 48 y 49.

principio de dignidad humana y del modelo de estado democrático de nuestro Estado; pilares importantes que garantizaran siempre el debido proceso ante cada caso concreto que resuelvan nuestros jueces; no olvidando que un imputado siempre tendrá inmerso, por su condición de ser humano, la dignidad, la cual nunca se le puede arrebatar, dignidad que conllevará a que siempre y en todo momento se le juzgue conforme a todas garantías constitucionales y penales, las cuales caracterizan un debido proceso.

Agrega que la calidad de derecho fundamental, se deriva de la cuarta disposición final y transitoria que ordena la obligación de interpretar las disposiciones constitucionales a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos. En otra sentencia, siguiendo esta misma línea, sostiene que el contenido nuclear de los derechos humanos derivados de instrumentos internacionales es compartida por el constitucionalismo en atención a “la convicción jurídica del valor de la dignidad de la persona humana, a cuya protección y servicio se reconduce, en última y definitiva instancia, el ejercicio de todo poder”⁷.

Se sigue hablando de la dignidad humana, en el sentido de que esta es el núcleo de todos los derechos constitucionales; es decir, aunque no esté reconocido de forma expresa determinado derecho en nuestra constitución, no debemos olvidar que nuestro país se encuentra suscrito a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos, lo cual genera que nuestra normativa constitucional se debe ajustar a las disposiciones de tales instrumentos internacionales.

La imparcialidad del juzgador se basa en la principal idea de encargar a un tercero desinteresado y ajeno a la contienda la resolución de una controversia surgida entre dos

⁷ Sentencia del Tribunal Constitucional N° 2730 – 2006 – PA/TC, FJ 9

intereses particulares. Como sabemos el juez siempre tiene que ser ajeno al proceso que va a resolver, por lo que resulta tan cuestionable que éste tome como medio probatorio una declaración previa del imputado, y peor aún que tal documento forme convicción en él y sirva para finalmente fundamentar una sentencia condenatoria; es preciso señalar lo peligroso que resulta ser tal situación, a tal punto de parcializar al juez, creo que es más factible y adecuado que el juez interroge directamente y en persona al imputado, solo así con la discrecionalidad que le es inherente y usando las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia se formará un criterio sólido sobre la responsabilidad penal del sujeto.

Y atendida esa perspectiva se le exige al juzgador a) una posición: no ser parte de la contienda, (el juez no puede asumir procesalmente funciones de parte ni puede tener relaciones jurídicas o fácticas con las partes que vislumbren su voluntad por alguna de ellas) b) una actitud: dejar al margen las condiciones subjetivas en el ejercicio de la función. Condiciones que garantizan “la confianza que los tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática”, que a su vez exige dos condiciones, una para el juez; la otra, para la ciudadanía: la apariencia de imparcialidad y la convicción del justiciable.

Es muy importante analizar estas dos condiciones; en primer lugar, la apariencia de imparcialidad, la cual tiene como finalidad asegurar la confianza social, por lo que es sumamente necesario que el juez guarde las apariencias. Es decir, no solo es cuestión de actuar imparcialmente, sino que además esa imparcialidad debe exponerse “hacia afuera”, por lo que corresponde al juez evitar toda conducta que ponga en riesgo el cumplimiento de su obligación. En tal sentido, si se diera el caso de que el juez no pueda asegurar dicha apariencia entonces deberá abstenerse o, en su defecto, el ciudadano puede recusarlo,

siempre que las sospechas o dudas no sólo surjan de la mente del justiciable, sino que es necesario asegurar objetiva y legítimamente una materialidad que justifique la petición.

Con respecto a la segunda variable, que gira en torno a la convicción del justiciable, no solo se trata de una vertiente subjetiva, en la que el ciudadano duda por la simple posibilidad psicológica de dudar, sino que se hacen necesarias unas determinadas condiciones, con el ánimo de evitar la arbitrariedad de aquel.

Así aparecen las dos dimensiones, subjetiva y objetiva que conforman el derecho. Dice el Tribunal Constitucional que, la imparcialidad subjetiva “se refiere a cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o en el resultado del proceso”, mientras que la objetiva “está referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable”⁸.

La primera dimensión también supone la exclusión del fuero interno del juez de “cualquier prejuicio indebidamente adquirido”, mientras que la segunda intenta asegurar la ausencia de dudas respecto de la imparcialidad del juez. Atendidas las definiciones dadas, el tema es asegurar cuándo el justiciable puede de modo objetivo y justificadamente cuestionar la imparcialidad del juez, o mejor cuando estamos ante sospechas objetivamente justificadas.

En la esfera subjetiva es muy difícil de probar, pues supone una intromisión en el fuero interno del juzgador, al punto que queda resguardada bajo la presunción de que el juez es subjetivamente imparcial “hasta que se pruebe lo contrario”. El asunto es cómo probar lo que por sí mismo es difícil de acceder por competir de modo único al juzgador.

⁸ Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 00004 – 2006 – AI/TC, FJ 20

Con esta primera garantía del debido proceso, la imparcialidad del juez, a mi entender quedaría lesionada por la oralización de las declaraciones previas del imputado, pues el juez puede formarse un criterio que a la postre servirá para determinar culpabilidad del procesado, culpabilidad que estará basada en un elemento tan débil, que es incapaz de fundamentar correctamente responsabilidad penal.

3.2.2.. Presunción de Inocencia

El principio de presunción de inocencia, dentro del marco del debido proceso, consiste en el derecho de toda persona acusada con la comisión de un delito, a ser considerada como inocente en tanto no se establezca legalmente su culpabilidad, a través de una sentencia definitiva, la cual se haya obtenido mediante un proceso en donde se hayan respetado las garantías constitucionales que revelan un respeto a un debido proceso, dentro del marco del Estado Social y Democrático de Derecho.

El principio que comento, el de presunción de inocencia ha sido considerado como uno de los pilares del ordenamiento jurídico de todo estado democrático, al establecer la responsabilidad penal del individuo, únicamente cuando se acredita debidamente su culpabilidad.

La razón de ser del derecho a la presunción de inocencia es el aseguramiento y respeto a cabalidad de la seguridad jurídica, además de la necesidad de garantizar a toda persona inocente que no será condenada sin que existan pruebas suficientes que destruyan tal presunción; esto es, que demuestren su culpabilidad y que justifiquen una sentencia condenatoria en su contra.

La presunción de inocencia como garantía inmersa dentro del debido proceso tiene sustento constitucional en el artículo 24°, parágrafo e) de nuestra Constitución Política, en el que se establece que: Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su culpabilidad.

El principio en estudio, el de presunción de inocencia, es una garantía jurídico penal que establece la inocencia de la persona como regla; en consecuencia, solo se justificará la intervención del estado, a través de una sanción penal, cuando se demuestre a través de un proceso penal la culpabilidad de la persona, analizada ésta como último estadio en la teoría del delito.

El principio en análisis, presunción de inocencia tiene tres significados:

Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo de proceso penal, en el que se mira fundamentalmente a establecer garantías para el imputado frente a la actuación punitiva estatal.

Como postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el inculcado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso, fundamentando en este sentido la excepcionalidad de la prisión preventiva.

Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la prueba completa de la

culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, imponiéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada.

El primer significado que adquiere el principio de presunción de inocencia gira en torno al establecimiento de las garantías para el imputado frente a la actuación punitiva estatal; de tal forma que se garantice el aseguramiento de todos los derechos que le asisten al imputado, además que sea juzgado con las garantías mínimas que garantizan un estado social y democrático de derecho.

El segundo significado sobre el principio de presunción de inocencia está referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, partiendo siempre de que tal sujeto es inocente; postulado que ameritará se restrinjan al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento que esté recibiendo el imputado durante el proceso, he aquí donde entra a tallar la excepcionalidad de la prisión preventiva, que como sabemos ha dejado de ser la excepción para convertirse prácticamente en la regla.

El tercer último significado sobre presunción de inocencia se basa en que este principio constituye una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal, es decir está muy relacionado con la actividad probatoria, en otras palabras, la prueba completa de la culpabilidad del imputado, la cual debe ser suministrada por la acusación, imponiéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada.

Con respecto a mi planteamiento es interesante tomar en consideración este último significado de presunción de inocencia, en el sentido, de concluir que es difícil la posibilidad de que, mediante la oralización de las declaraciones previas del imputado, se pueda tener certeza de la culpabilidad del sujeto activo del delito, pues si utilizamos tales

declaraciones que constan en escrito, incorrectamente tendrían la calidad de ser material probatorio para enervar la presunción de inocencia.

Es conveniente analizar de qué manera la oralización de las declaraciones previas en juicio oral implicaría la vulneración a la garantía de presunción de inocencia, como presupuesto del debido proceso.

(...) La excepcionalidad en la admisión de la lectura de una declaración sumarial de un testigo se basa en argumentos de urgencia y excepcionalidad, por lo que en caso que estos presupuestos no se presenten es indispensable que el testigo concurra al acto oral para que exponga lo que sabe acerca de los hechos enjuiciados. En consecuencia, la insistencia del testimonio personal en el acto oral, en esas condiciones de rechazo del acta de declaración sumarial, muy bien puede ser invocada en la oportunidad prevista en el artículo trescientos setenta y tres, apartado dos, del nuevo Código Procesal Penal. La necesidad del pleno esclarecimiento de los hechos acusados exige que se superen interpretaciones formalistas de la ley procesal, sin que ello signifique, desde luego, una lesión a los derechos de las partes⁹.

En tanto a la cita tomada, perteneciente a la Casación № 10 – 2007 notamos que se justifica la oralización de las declaraciones previas del imputado, ante la inexistencia de declaración testimonial; y a modo de excusa se establece que ante la necesidad de esclarecimiento de los hechos es necesaria la lectura de tales declaraciones, aunque para

⁹ Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 29 de enero de 2008. Fundamento Jurídico 6. (Casación № 10 – 2007).

ello se tengan que superar interpretaciones formalistas de la ley procesal, sin que esto último signifique lesión a los derechos de las partes.

A mi entender la oralización de las declaraciones previas si vulnera la garantía constitucional de presunción de inocencia, dentro de los parámetros del debido proceso, pues el órgano jurisdiccional no debió admitir como pruebas las declaraciones previas. Máxime si el primer párrafo del artículo II del Título Preliminar del Código Penal establece que:

Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente, y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales.

Es decir, el principio de presunción de inocencia establece que los hechos objeto de imputación, deben estar referidos y vinculados a la actuación del imputado, ello sin lugar a ninguna duda; y esto solo se logrará con las pruebas valoradas, las mismas que tienen que tener suficiente carácter incriminatorio, que puedan conllevar a posteriormente sostener un fallo condenatorio; solo siguiéndose este camino se asegurará el respeto al derecho de presunción de inocencia, dentro del marco del debido proceso.

A mi criterio la oralización de las declaraciones previas del imputado en juicio oral no revela la suficiente capacidad para formar convicción al juez sobre la responsabilidad penal del sujeto activo del delito; en consecuencia, su lectura en juicio devendría inminentemente en la vulneración al debido proceso, en forma más específica como un atentado al principio constitucional de presunción de inocencia.

Al respecto, José Antonio Neyra Flores (2010), en su libro: *Manual del Nuevo Proceso Penal y Litigación Oral*, nos manifiesta que:

La presunción de inocencia, en tanto regla de juicio, supone que en el caso que el órgano sentenciador, tras la valoración del material probatorio obrante en el proceso, tenga dudas sobre la culpabilidad del acusado, debe declarar su inocencia. Por tanto, el órgano jurisdiccional debe absolver en los casos en los que no haya alcanzado la certeza necesaria de la culpabilidad del acusado sobre la base del material probatorio disponible (pág. 176).

El principio de presunción de inocencia gira en torno a que, tras la valoración del material probatorio del proceso, el juez este plenamente convencido de la culpabilidad del sujeto activo del delito, sin existir ninguna duda al respecto porque tal situación devendrá en la absolución del imputado. En tal sentido es sumamente importante determinar de qué forma la oralización de las declaraciones previas del imputado puede servir como material probatorio suficiente que enervaría la presunción de presunción de inocencia y consecuencia serviría para determinar culpabilidad en el sujeto activo del delito.

3.2.3. La información como derecho

Constitucionalmente este derecho se encuentra amparado dado que se puede reconocer los incisos 14 y 15 del artículo 139° de nuestra Carta Magna, en una cercana relación con el debido proceso, en el cual se incluye su participación como una directriz de control, el hecho de que se la reconozca este derecho al imputado implica que conozca

de los pormenores del desarrollo de la investigación a fin de que pueda ejercer su legítimo derecho a la defensa.

El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención.

Es necesario recoger un concepto doctrinario de lo que implica el derecho a la información, dentro del margen a un proceso en donde se garantice el debido proceso, siendo así tenemos, la del autor Néstor Pedro Sagüés (1993), quien en su libro: *Elementos de Derecho Constitucional*, manifiesta que: “es el derecho a ser informado de las causas de la demanda o acusación, en forma inmediata y por escrito; en este entendido, la prueba de cargo debe ser suficiente y obtenida mediante procedimientos constitucionalmente legítimos” (pág. 336).

Con respecto a la segunda idea del autor es necesario resaltar su importancia como apoyo a mi trabajo de investigación; en el sentido que la prueba de cargo debe ser obtenida mediante procedimientos constitucionalmente legítimos; tal vez sería necesario determinar hasta que magnitud la oralización de las declaraciones previas del imputado devendría en ser un procedimiento constitucionalmente ilegítimo, que devendría en la vulneración al derecho de información, como parámetro dentro del debido proceso.

3.2.4. Valoración de las Pruebas

El análisis probatorio es una de las etapas más importantes en un juicio oral, el cual se encuentra sujeto a formalidades preestablecidas. La valoración del material probatorio se analiza de manera libre y de acuerdo con la sana crítica, teniendo en cuenta para ello, principalmente, la pertinencia de su contenido con la acreditación de los hechos alegados. En efecto, desde su jurisprudencia originaria, la CIDH ha señalado que:

(...) La Corte debe determinar cuáles han de ser los criterios de valoración de las pruebas aplicables en este caso. Ni la Convención ni el Estatuto de la Corte o su Reglamento tratan esta materia. Sin embargo, la jurisprudencia internacional ha sostenido la potestad de los tribunales para evaluar libremente las pruebas, aunque ha evitado siempre suministrar una rígida determinación del quantum de prueba necesario para fundar el fallo (...)¹⁰.

Como podemos, según la cita, ver no existen criterios definidos en cuanto a la evaluación de las pruebas, del mismo modo no existe un criterio cuantitativo en cuanto a la cantidad de pruebas necesarias para fundar un fallo; razones por las que consideramos que todo queda a discrecionalidad del órgano jurisdiccional, quien utilizando las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica se encargará de evaluar cada caso en concreto y definir la solución de cada uno.

El proceso de valoración de las pruebas constituye un juicio de aceptabilidad de los resultados probatorios. Esta valoración constituye el núcleo del razonamiento probatorio; es decir, del razonamiento y la lógica que conduce a una afirmación sobre hechos controvertidos. Contrario a lo extraído de la cita incorporada, advertimos que

¹⁰ Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1998, párrafo 127.

nuestro sistema jurídico, por medio del denominado "derecho a la prueba", exige la aplicación de reglas de la epistemología o la racionalidad generales para la valoración de la prueba.

Siendo ello así, el proceso de valoración de la prueba no puede ser una operación libre de todo criterio y cargada de subjetividad, sino que debe estar sometida a las reglas de la lógica, de la sana crítica, de la experiencia.

Pero siempre se deberá tomar en cuenta la incertidumbre que caracteriza la toma de decisiones en el ámbito de la prueba judicial, pues existe relatividad en tanto al hallazgo del valor de verdad. Pues, aunque el proceso de valoración de la prueba habrá permitido otorgar a cada una de las hipótesis un determinado grado de confirmación, este difícilmente adquirirá la calidad de certeza absoluta.

Es importante precisar que, por disposición de la ley procesal específica, todos los medios probatorios de un proceso penal son actuados durante el juicio oral, estación procesal en la cual el valor probatorio de los medios será compulsado y corroborado con otros medios de prueba que, valorados de acuerdo con el criterio de conciencia del juzgador, serán determinantes para establecer la responsabilidad penal; debiendo indicar el juzgador, al expedir sentencia, las razones que le llevaron a determinar la inocencia o culpabilidad del procesado¹¹.

Podemos notar que es plenamente establecido que los medios probatorios deben ser actuado en juicio oral, los mismos que serán comparados y corroborados con otros medios de prueba, todos los cuales serán analizados según el criterio discrecional de órgano jurisdiccional; de esta forma el cuestionamiento que viene a nuestra mente es de

¹¹ Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 18 de mayo del 2005. (Expediente Nº 2101 – 2005 – HC/TC).

si verdaderamente se pueden analizar y compulsar como medio probatorio la oralización de las declaraciones previas del imputado, o si lo más lógico y razonable sería que se tomaran las declaraciones que vierta el mismo imputado en juicio oral, pues si lo que se desea es formar plena convicción en el juez penal, difícilmente la lectura de declaraciones anteriores podrán coadyuvar a generar tal convicción.

Dicho de otro modo, el valor de un medio probatorio, en el caso de que éste fuera considerado elemento probatorio, deberá ser confirmado con otros de igual naturaleza, y mencionado expresamente en la sentencia a expedirse. Por tanto, el juzgador podría atribuir valor probatorio a la declaración testimonial ofrecida y, en el caso de otorgárselo, mencionar qué pruebas o medios de prueba la confirman.

Por ello, la determinación de la responsabilidad penal conlleva la evaluación de los medios probatorios en conjunto, y exige que las conclusiones a las que se llegue sean producto de un análisis razonado. En este orden de ideas, no es exacto afirmar que “se dictó sentencia condenatoria contra los favorecidos porque durante el juicio oral se descartaron las declaraciones testimoniales ofrecidas y admitidas”, toda vez que ningún medio probatorio tiene la calidad de prueba plena capaz de producir en el juzgador una total convicción respecto del delito instruido, así como de la culpabilidad atribuida al agente, que lo obligue a emitir un fallo”.

Se establece que todo medio probatorio debe ser debidamente corroborado con otro y solo así podrá ser suficiente y pertinente para formar convicción en el juez para que pueda emitir una sentencia absolutoria condenatoria. Situación la anterior que amerita que se deben evaluar en conjunto todos los medios probatorios y de ese análisis razonado se llegue a una conclusión que resuelva el caso analizado. Con respecto a mi planteamiento es necesario afirmar, sin error al equivoco, que difícilmente la oralización

de las declaraciones previas del imputado podrá tener la calidad de ser medio probatorio que enervar la presunción de inocencia del imputado, pues su suficiencia probatoria se ve mermado ante su idoneidad para formar convicción en el juez.

3.2.5. Derecho a Declarar Libremente

El origen de las constituciones se justifica en la necesidad de poner límites al poder estatal. De tal forma que el enfrentamiento de un ciudadano con el Estado, supone una grave desigualdad de armas, en razón a que el ciudadano no tiene los recursos para defenderse de aquellos otros que detenta el Estado para atacar.

De allí que el texto constitucional esté plagado de garantías y derechos con las que se pretende equiparar las desventajas de uno con los recursos del otro. La presunción de inocencia es una poderosísima garantía con la que el Estado se enfrenta cuando pretende perseguir a un ciudadano, sea que tenga justificadas razones para hacerlo, sea que se trate de una arbitraria persecución.

Si tal persecución se realiza a través del derecho penal, las consecuencias pueden ser graves: pérdida de bienes, de la libertad y hasta de la vida. De allí que a los imputados se les concede derechos, que al común de los ciudadanos le parecerían excesivos. Ante una acusación fiscal, el imputado tiene derecho a permanecer callado o a expresar su propia versión sobre los hechos, al amparo del derecho a la defensa.

El derecho a declarar sobre los hechos que constituyen la acusación, exige la compañía de un abogado defensor que le permita conocer las consecuencias del acto declaratorio, lo que supone que su ejercicio no solo tiene que ser libre, sino también informado.

Así, queda proscrita cualquier declaración lograda mediante coacción, intimidación o afectación grave de la voluntad del imputado declarante o aquellas otras formas –mediante engaño, por ejemplo– en las que se pretenda una declaración sin que se cuente con abogado defensor.

El derecho a declarar del imputado es la facultad que éste tiene de expresar libremente su propia versión sobre los hechos imputados. Así, frente a la tesis fáctica del Ministerio Público se levanta la de la defensa del imputado, con lo que los medios de prueba han de actuarse y valorarse en función de las versiones que ofrecen los contendores. Sin embargo, debe precisarse que la declaración del acusado no es una “simple versión”, sino que, en más de una oportunidad, alcanza la calidad de medio probatorio.

En tal sentido, es preciso anotar que en el ejercicio de este derecho el declarante tiene hasta tres opciones: a) negar los cargos; b) admitir los cargos; c) admitirlos parcialmente. En el primer caso nos encontramos frente a la llamada “confesión del imputado”, pero en cualquiera que sea la opción asumida, el valor probatorio de la misma se alcanza sólo si existen otros medios de prueba que permitan corroborarla, se haya realizado libre y voluntariamente y, finalmente, se hubiere realizado ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado.

Desde esta perspectiva, la jurisprudencia adiciona como condiciones de valoración de la declaración del imputado, la existencia de un relato verosímil y coherente, así como la verificación de la personalidad del autor, las relaciones entre el supuesto autor y el agraviado, las motivaciones de la autoincriminación; todo ello con la finalidad de confirmar y asegurar que la indicada declaración deba ser considerada como medio de prueba suficiente, sea para condenar, sea para absolver.

En consecuencia, no basta con que una persona se presente ante las autoridades confesando un delito, sino que se requerirá de otros elementos que otorguen veracidad a la información. No basta, por ejemplo, que una persona se presente ante la Policía con el cadáver de otra diciendo que la ha matado, sino que se requerirá de elementos de convicción que descarte la intervención de otras personas en dicha muerte o la posibilidad del encubrimiento personal.

En esa misma medida, cuando un periodista, en medio del jaleo que supone el traslado de un presunto delincuente, logra arrancar una “confesión”, ésta no supone reconocimiento de culpabilidad alguna, si antes no se ha cumplido con garantizar aquellas otras condiciones anotadas que exige el debido proceso y que la Constitución reclama.

El derecho a la libertad de declarar busca equilibrar el interés del Estado en ejercer su *Ius Puniendi* y el derecho del Individuo a no ser condenado por sus propias declaraciones, y también es partida de nacimiento de un derecho instrumental protector: El derecho a guardar silencio o derecho a callar, que ciertamente es más conocido, pues a la persona que es intervenida en relación con un delito, se le lee una cartilla, donde la primera advertencia es: “Usted tiene el derecho de guardar/mantener el silencio”.

En este orden de cosas, el derecho a guardar silencio es derecho instrumental de la prohibición de la autoincriminación, y ésta, también derecho instrumental del derecho a la defensa, que, a su vez, también lo es del debido proceso.

El derecho a no declarar contra sí mismo es el derecho que tiene el imputado a no ser obligado a declarar contra sí mismo y menos ha de declararse culpable. La no incriminación rige solo si se obliga al imputado a emitir una declaración que exteriorice un contenido.

Una manifestación privilegiada del derecho a defenderse de una imputación penal. El imputado tiene el derecho a introducir válidamente al proceso, la información que considere adecuada. Él es quien tiene el señorío y el poder de decisión sobre su propia declaración, lo cual comprende la asistencia efectiva de un abogado defensor que participe antes y durante la diligencia de declaración.

Así el derecho a la no autoincriminación protege de ser obligado a declarar con contra sí mismo, y el derecho de guardar silencio, protege de ser obligado a responder (contra uno mismo o contra otro), pero ambos, protegen al imputado de sufrir consecuencias negativas para quien los ejerce.

La Constitución, en el artículo 139°, inciso 14 reconoce el derecho a la defensa como principio y derecho constitucional manifestado en dos aspectos: La autodefensa material y la defensa técnica, por ello de ambas puede provenir la decisión de guardar silencio, en ese sentido, el Código Procesal Penal del ha dispuesto: En el artículo 71°, inciso 2, d) del Código Procesal Penal que los imputados tienen el derecho de “Abstenerse de declarar”, luego el artículo 87°, incisos 1 y 2 que: “Antes de comenzar la declaración del imputado, se le comunicará detalladamente el hecho objeto de imputación, los elementos de convicción y de pruebas existentes y las disposiciones penales que se consideren aplicables”, luego “se le advertirá que tiene derecho a abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio”.

Los artículos del Código Procesal Penal que he mencionado, deben ser debidamente aplicados debidamente, pues como podemos observar, nuestra problemática va ligada a lo controversial que suele resultar el hecho de que el sujeto activo del delito, a pesar de haberse negado a declarar, aun así sean utilizadas y oralizadas las declaraciones previas que éste haya manifestado en anteriores ocasiones, situación que nos lleva a pensar

si se está respetando a cabalidad tal derecho o si por el contrario se presenta una grave vulneración y contradicción con las normas señaladas.

3.2.6. Derecho a Declarar Libremente

Una de los grandes pilares del derecho a la presunción de inocencia es el derecho del imputado de no colaborar con su propia condena, concediéndosele la facultad de decidir voluntariamente si desea declarar o no; es decir, si decide de aportar elementos de prueba que finalmente, ante determinadas circunstancias lo llevarían irremediabilmente a su propia incriminación; en ese sentido se entiende como el fundamento al derecho a la no incriminación; ello como una evidencia del respecto al Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en el derecho penal garantista que asegure que tal derecho constitucional se respete a cabalidad.

Siendo así, es necesario tener una definición exacta y clara sobre el concepto del principio de no incriminación, para ello tomamos como referencia a Liliana Campos Aspajo y Rosa Karina Salas Pacha, quienes en su publicación titulada: *Garantía de la No Incriminación – Análisis de su Contenido en la Legislación Peruana y Española*, expresan que:

Nos encontramos frente a la garantía que tiene una persona para decidir libremente si declarará o no cuando viene siendo objeto de una persecución penal, así como también, de ser quien escoge el contenido de su declaración. Ya Binder ha señalado que el imputado tiene el señorío y poder en su decisión sobre su propia declaración, por lo que sólo él podrá

determinar lo que quiere o lo que no le interesa declarar, todo esto de manera voluntaria y libre (pág. 15).

El imputado posee la facultad de decidir en declarar o no, más aún en que éste escoja cual es el contenido que tendrá su declaración; en pocas palabras se le da al imputado el señorío en decidir lo que quiere declarar. Lo recogido por la autora adquiere suma importancia en el desarrollo de la investigación pues advierto que tal principio, el de no incriminación es el principalmente vulnerado ante la oralización de las declaraciones previas en el juicio oral.

Luego de haber recogido una definición de lo que constituye el principio de no incriminación, es ahora importante determinar la finalidad que cumple tal principio, para lo cual tomamos como referencia al autor Iñaki Sparza Leibar (1995), quien en su libro: *El Principio del Proceso Debido*, manifiesta que:

La finalidad de dicho principio es la de excluir la posibilidad de obligar al imputado de cooperar activamente en la formación de la convicción sobre sí mismo y la forma de conseguirlo es mediante la prohibición de utilizar en el proceso cualquier declaración del imputado que haya sido conseguido mediante la violación del principio del cual nos ocupamos (pág. 144).

Según lo verificado es prudente indicar que no se permite la incorporación del proceso de cualquier declaración del imputado que haya vulnerado tal principio, se me ocurre como ejemplo, el supuesto factico de que un sujeto sea obligado a declarar, pues ante tal situación se vulneraría el derecho a no declarar, además del principio de no incriminación; por lo que finalmente tal situación generará a posteriori, que al ser utilizada tal declaración en juicio oral, devenga en inminente vulneraciones a los garantías

que inspiran el debido proceso; según Monton Redondo (1995), quien en su libro: *Derecho Jurisdiccional*, exige:

La prevalencia de la libertad y espontaneidad de aquel (del declarante), y el necesario respeto a sus derechos y garantías constitucionales, tanto en cuanto al hecho de declarar como al contenido de sus declaraciones. Supone, por tanto, la invalidez de lo obtenido por vías directa o indirectamente vulneratorias de aquellos, cualesquiera que sean (pág. 199).

Es notorio que ante la oralización de las declaraciones previas del imputado en juicio oral, aun cuando este haya hecho uso a su derecho de no incriminación, pues tal situación vulnera los derechos y garantías constitucionales que asisten al imputado en todo proceso penal. El inculcado, luego de ser por muchos lustros objeto de prueba, se convierte con el surgimiento de los movimientos liberales en sujeto del proceso, así el autor Albin Eser (1998), en su libro: *Temas de Derecho Penal y Procesal Penal*, nos manifiesta que:

Un participante provisto de derechos independientes, que toma parte en el proceso, es decir, en un sujeto activo del proceso. Este papel de sujeto no se le puede discutir hoy en día, pues la "dignidad humana" garantizada en la Constitución (...) es intangible respecto del inculcado y porque esa dignidad prohíbe degradar a un individuo a un objeto involuntario (pág. 21).

En base a ello se puede establecer que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, en tal sentido esta garantía constitucional, dignidad, adquiere especial importancia en cuanto al tratamiento que

recibirá el imputado en un proceso penal, pues por más grave que sea la conducta ilícita que se le imputa cometida, siempre está latente la prohibición de degradar la dignidad de tal individuo, pues la misma es inherente a la persona y nunca se pierde.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS Y RESULTADOS

Análisis de la valoración de las declaraciones previas del imputado vulneran las garantías constitucionales.

En esta parte de la investigación corresponde plasmar los resultados que se han obtenido del análisis de los aspectos que han estructurado el trabajo de campo, dada la constitución de la investigación una de tipo descriptiva, procedimos al análisis de la realidad que circunda el tema de investigación; siendo que la población se delimitó en del distrito judicial de Lambayeque en donde se recogieron las posturas de los operadores jurídicos en el campo del Derecho Penal.

4.1. Análisis de los resultados:

4.1.1. Resultados de la opinión de operadores jurídicos.

En esta sección del análisis, dirigiremos la atención a la opinión recogida de los operadores jurídicos en la ciudad de Chiclayo, la misma que resultó de la aplicación del cuestionario de encuesta que figura como anexo N° 01 de esta investigación.

Los resultados de la opinión de los operadores nos darán la luz del conocimiento que se maneja en la comunidad jurídica respecto al tema materia de investigación, ello constituirá un factor importante al momento de la construcción de la discusión en cuanto lo referido a las conclusiones.

Así tenemos la primera interrogante planteada cuyos resultados se plasman inicialmente como sigue:

Tabla 1: Resultado de la afirmación N° 1 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la C.S.J.L

-
- 1. La oralización de las declaraciones previas del imputado deben tomarse con la cautela suficiente a fin de que la valoración en el juicio oral que se realice sobre ellas no vulnere el derecho de defensa del imputado.**
-

ALTERNATIVA	CANTIDAD
	D
a. De Acuerdo	27
b. En Desacuerdo	22
c. No Opina	01
	50
TOTAL	

Descripción: Cuadro N° 01, a la pregunta planteada: 1. La oralización de las declaraciones previas del imputado deben tomarse con la cautela suficiente a fin de que la valoración en el juicio oral que se realice sobre ellas no vulnere el derecho de defensa del imputado.; de un total de 50 muestras realizadas, 27 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo y 22 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 01 no opinaron al respecto.

Ilustración 1: Gráfico porcentual de la afirmación N° 1 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la C.S.J.L

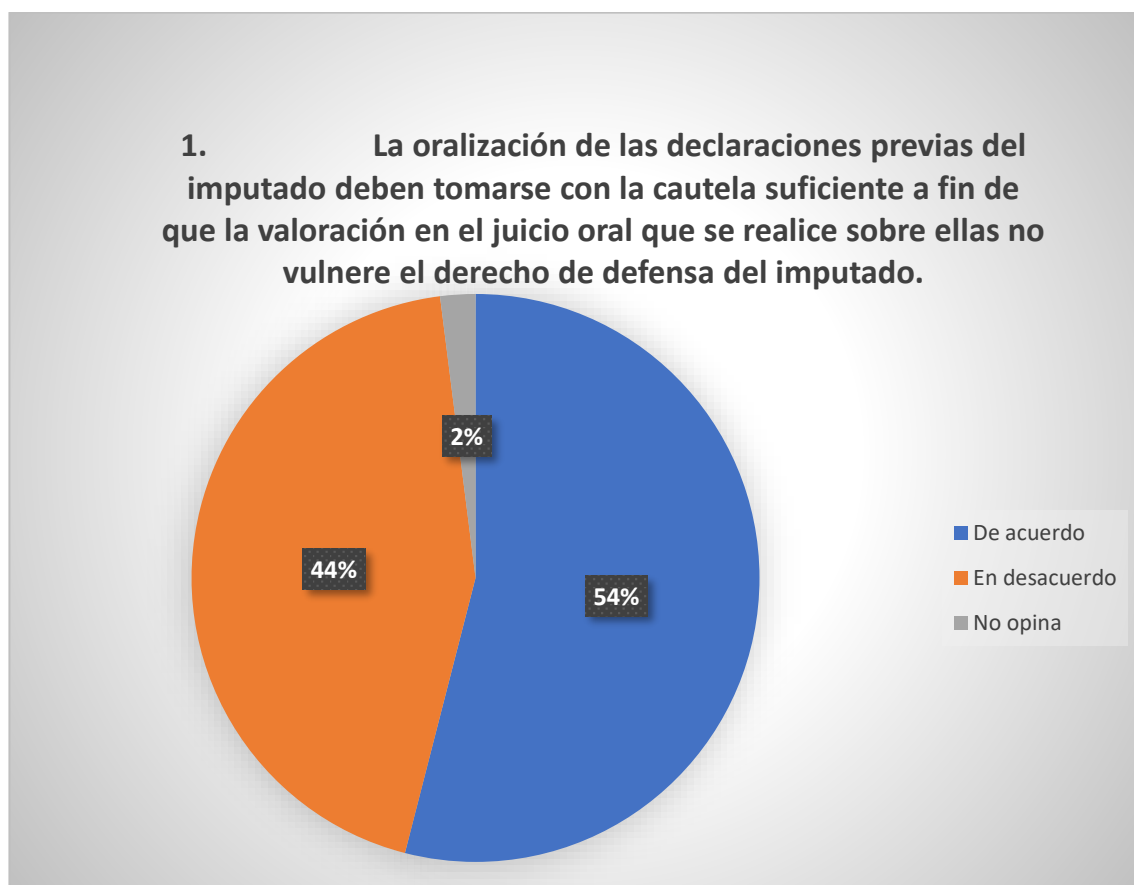


Tabla 2: Resultado de la afirmación N°2 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la C.S.J.L

-
2. La consecuencia directa del derecho a guardar silencio debe constituirse como el límite que impida la oralización de las declaraciones previas del imputado durante el juicio oral.
-

ALTERNATIVA	CANTIDAD
a. De Acuerdo	49
b. En Desacuerdo	01
c. No Opina	00
	50
TOTAL	

Descripción: Cuadro N° 02, a la pregunta planteada: La consecuencia directa del derecho a guardar silencio debe constituirse como el límite que impida la oralización de las declaraciones previas del imputado durante el juicio oral; de un total de 50 muestras realizadas, 49 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 01 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 00 No opinaron al respecto.

Ilustración 2: Gráfico porcentual de la afirmación N° 2 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la C.S.J.L.

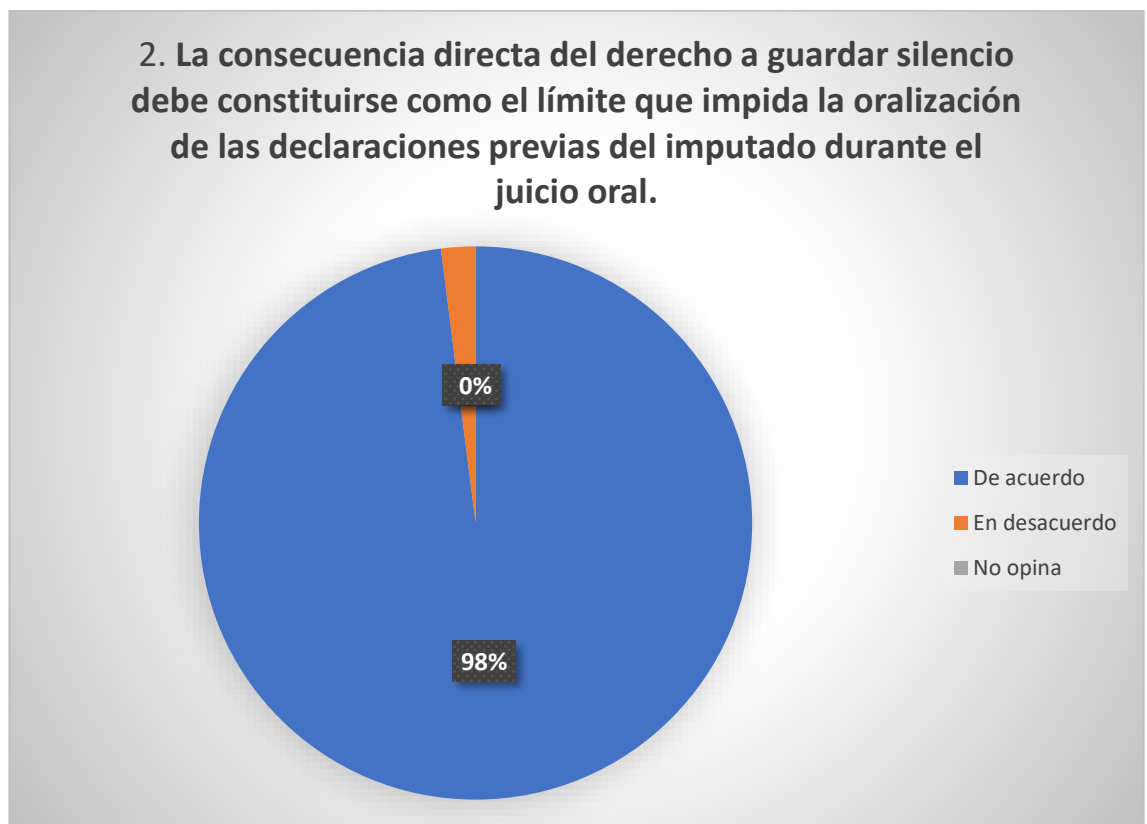


Tabla 3: Resultado de la afirmación N° 3 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la C.S.J.L.

3. Considerar a las declaraciones previas como medios de prueba en el juicio y propender a su valoración sin que el Fiscal las haya postulado vulnera el debido proceso y el derecho de defensa del imputado.

ALTERNATIVA	CANTIDAD
a. De Acuerdo	41
b. En Desacuerdo	09
c. No Opina	00
TOTAL	50

Descripción: Cuadro N° 03, a la pregunta planteada: 3. Considerar a las declaraciones previas como medios de prueba en el juicio y propender a su valoración sin que el Fiscal las haya postulado vulnera el debido proceso y el derecho de defensa del imputado; de un total de 50 muestras realizadas, 41 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 09 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 00 No opinaron al respecto.

Ilustración 3: Gráfico porcentual de la afirmación N° 3 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la C.S.J.L.

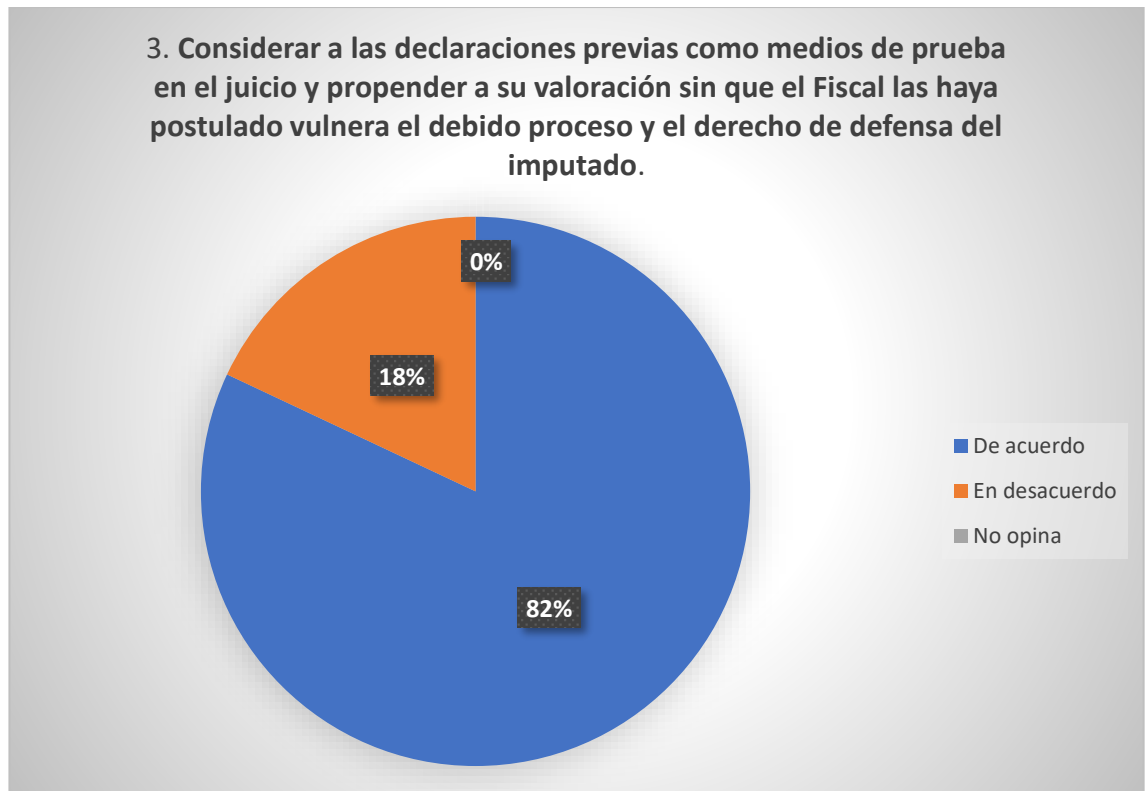


Tabla 4: Resultado de la afirmación N° 4 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la C.S.J.L.

4. El derecho penal tiene un corte garantista en razón que procura la protección de los derechos fundamentales de las partes, materializándose a través de la ejecución de los principios rigen el proceso penal	
<hr/>	
<hr/>	
ALTERNATIVA	CANTIDAD
	D
a. De Acuerdo	45
b. En Desacuerdo	04
c. No Opina	01
	<hr/>
	50
TOTAL	

Descripción: Cuadro N° 04, a la pregunta planteada: El derecho penal tiene un corte garantista en razón que procura la protección de los derechos fundamentales de las partes, materializándose a través de la ejecución de los principios rigen el proceso penal; de un total de 50 encuestados, 45 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 04 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 01 No opinaron.

Ilustración 4: Gráfico porcentual de la afirmación N° 4 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la C.S.J.L.

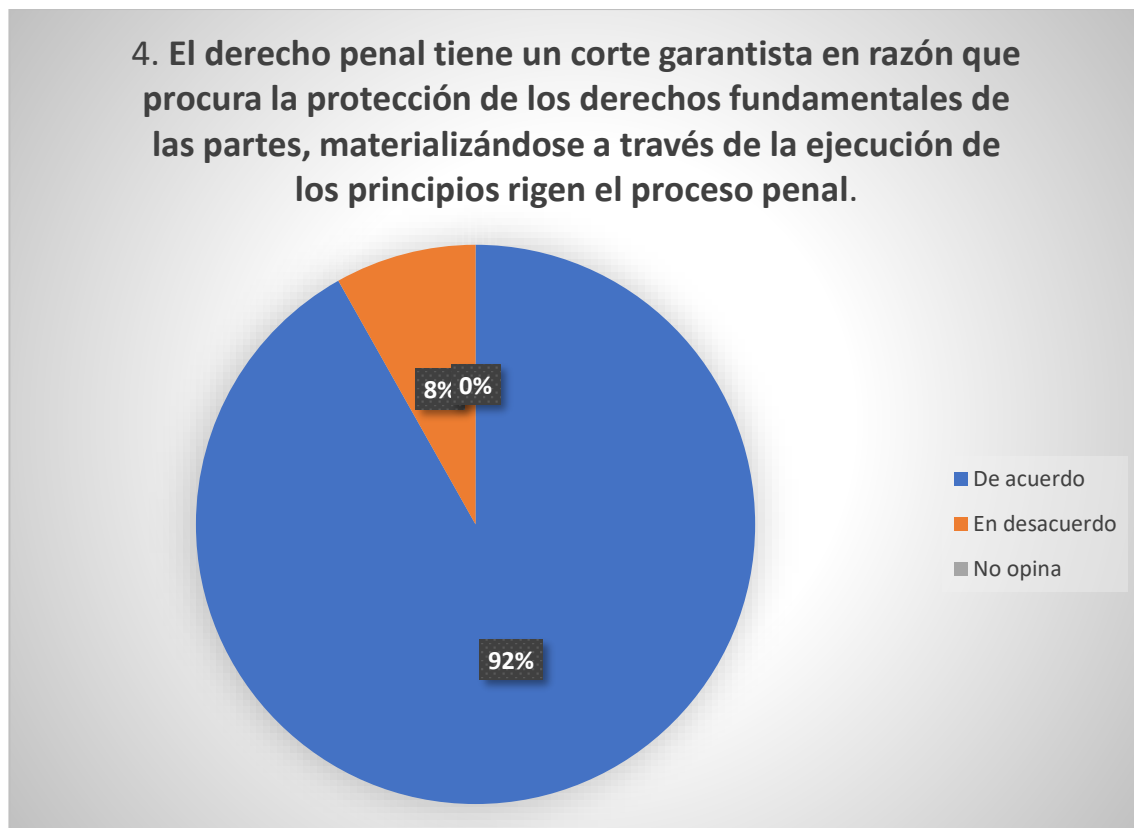


Tabla 5: Resultado de la afirmación N° 5 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la C.S.J.L.

-
- 5.** Las garantías constitucionales incorporan la protección de las partes a través de los principios como el debido proceso que reúne varios derechos fundamentales que aseguran una investigación acorde a ellos, incluyendo a la tutela jurisdiccional efectiva que asiste del derecho a la defensa del imputado a que se respete su derecho a guardar silencio.
-

ALTERNATIVA	CANTIDAD
a. De Acuerdo	35
b. En Desacuerdo	13
c. No Opina	02
	50
TOTAL	

Descripción: Cuadro N° 05, a la pregunta planteada: Las garantías constitucionales incorporan la protección de las partes a través de los principios como el debido proceso que reúne varios derechos fundamentales que aseguran una investigación acorde a ellos, incluyendo a la tutela jurisdiccional efectiva que asiste del derecho a la defensa del imputado a que se respete su derecho a guardar silencio; de un total de 50 encuestados, 35 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 13 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 02 No opinaron al respecto.

Ilustración 5: Gráfico porcentual de la afirmación N° 5 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la C.S.J.L.

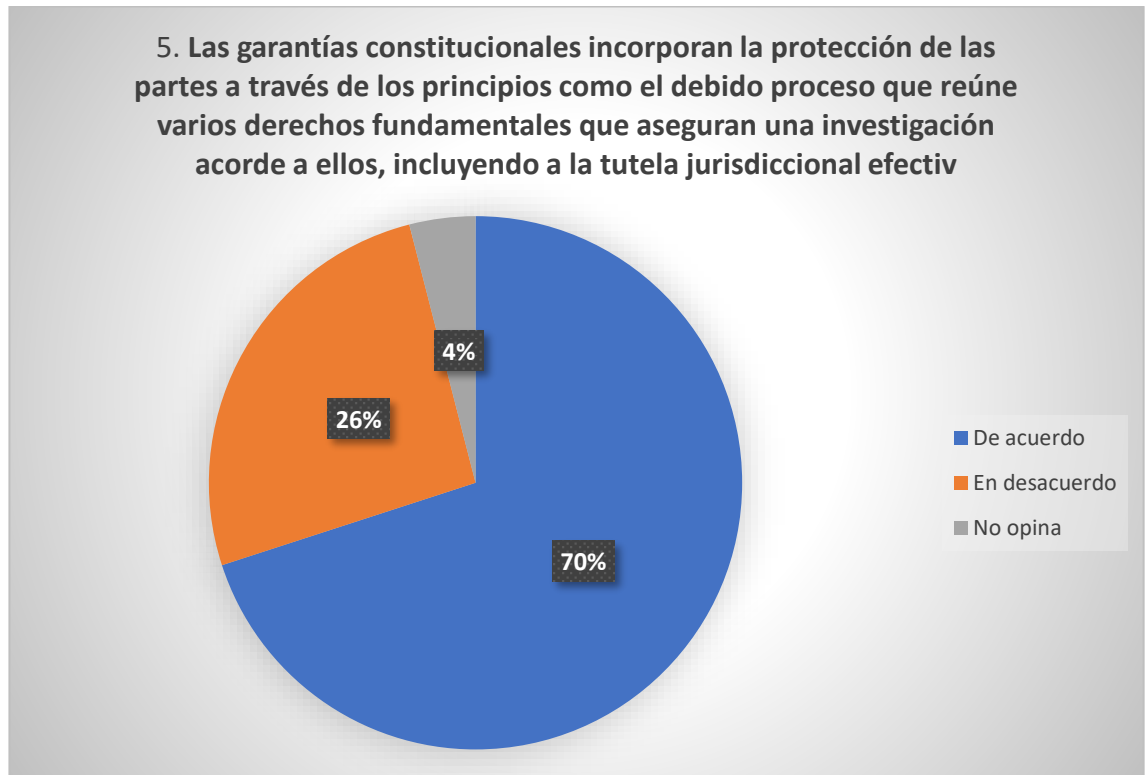
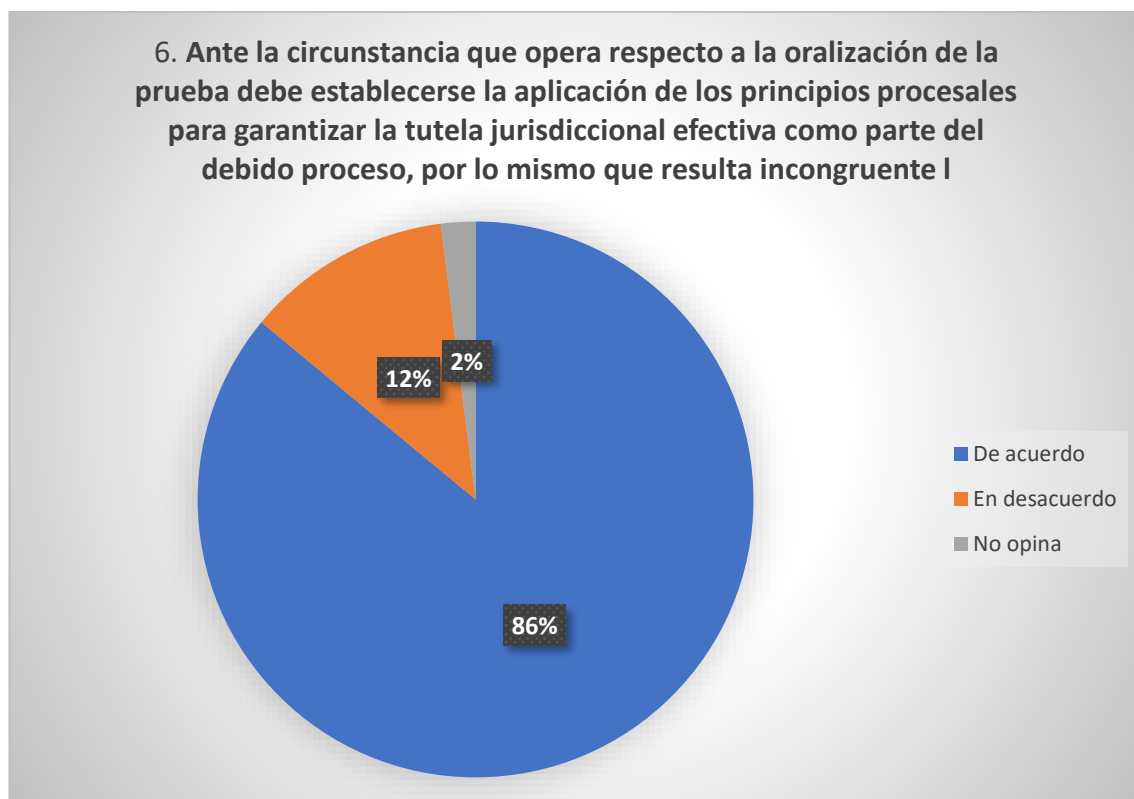


Tabla 6: Resultado de la afirmación N° 6 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la C.S.J.L.

<p>6. Ante la circunstancia que opera respecto a la oralización de la prueba debe establecerse la aplicación de los principios procesales para garantizar la tutela jurisdiccional efectiva como parte del debido proceso, por lo mismo que resulta incongruente la oralización de las declaraciones previas en juicio oral.</p>	
ALTERNATIVA	CANTIDAD
a. De Acuerdo	43
b. En Desacuerdo	06
c. No Opina	01
	50
TOTAL	

Descripción: Cuadro N° 06, a la pregunta planteada: Ante la circunstancia que opera respecto a la oralización de la prueba debe establecerse la aplicación de los principios procesales para garantizar la tutela jurisdiccional efectiva como parte del debido proceso, por lo mismo que resulta incongruente la oralización de las declaraciones previas en juicio oral; de un total de 50 muestras realizadas, 43 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 06 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 01 No opinaron al respecto.

Ilustración 6: Gráfico porcentual de la afirmación N° 6 en la encuesta aplicada a los operadores jurídicos de la C.S.J.L.



CAPÍTULO V

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS

5.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Corresponde a esta sección la discusión de los resultados obtenidos con el sentido que representan las metas trazadas por los objetivos específicos, con el fin de verificar su validez y finalmente conseguir.

5.1.1. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar doctrinariamente las declaraciones previas del imputado en las etapas del proceso penal”

¿Cómo se puede identificar la validez de las declaraciones previas del imputado?

Reconocer si las declaraciones previas del imputado están imbuidas de validez es una tarea que toma su base de análisis en la observación de las etapas del proceso penal, así resulta como primer aporte el hecho de que tales declaraciones tendrán un sentido distinto según la etapa, ello no quiere decir que carezcan de validez bajo el carácter de prueba, sólo se establece tal diferencia en función a la forma en que procesalmente se han de tratar.

¿Qué relación se puede ubicar entre la validez de las declaraciones previas con el derecho a guardar silencio?

El derecho a guardar silencio en la literatura jurídica esta íntimamente relacionada con las declaraciones del imputado, puesto que dependen de la voluntad de éste para obtener como resultado la declaración, en el entendido caso de que se trate de la verdad aquello que asuma el mismo; en ese sentido cabe indicar que la doctrina es clara al

sostener que el acusado no está obligado a decir la verdad, por lo que no recae sobre él el deber de veracidad.

El otro aspecto que permite encontrar la relación es precisamente el referido a la prueba, quedando claro que en el modelo acusatorio – adversarial que recoge nuestro Código Procesal Penal 2004, la carga de la prueba debe ser asumida por el fiscal, quien con las pruebas ofrecidas en su escrito de acusación y admitida en el auto de enjuiciamiento, ha de pretender desvirtuar el estado jurídico – procesal de inocencia que reviste el imputado.

De conformidad con el desarrollo teórico de la investigación ...

TOMA DE POSTURA:

Resulta imprescindible tener en cuenta que las etapas que se han marcado en el proceso penal peruano tienen la intención de delimitar acciones que permitan desarrollar la investigación de la manera más idónea, así en su formación se puede apreciar el respecto irrestricto de los derechos fundamentales que son el pilar del derecho penal garantista.

En ese sentido corresponde indicar que las declaraciones del imputado que han sido tomadas en la etapa previa al proceso penal no tiene el mismo carácter de aquellas que son emitidas cuando el proceso en sí ya está oficialmente constituido lo cual las incorpora en el marco de legalidad, así resulta jurídicamente válido opinar que no tendrán el carácter de prueba.

5.1.2. Discusión sobre el objetivo: “Estudiar la realidad de la oralización de las declaraciones previas del imputado en el juicio oral”.

¿Qué relación se ubica entre la oralización de las declaraciones previas del imputado en el juicio oral y el derecho a guardar silencio?

Desde el punto de vista del principio constitucional que asegura el derecho de guardar silencio al imputado se puede establecer de que el derecho a guardar silencio es un derecho fundamental que asiste al imputado o acusado (dependiendo del estadio en que encuentre el proceso penal) y que, por consiguiente, su vulneración daría lugar a calificar el interrogatorio como prueba prohibida.

Por lo mismo que para el caso de la oralización de las declaraciones previas en el juicio oral para que se constituyan como pruebas conlleva a la vulneración del derecho en mención; este tipo de acto conlleva también a un análisis más profundo incluso inspirado el cuestionamiento de que si el Juez sentenciador puede valorar en algún sentido el silencio del imputado o acusado; lo cual da inicio a un aspecto de desconcierto de los aspectos que se supone son garantías en el proceso penal.

El hecho de que existan contradicciones en las declaraciones del imputado, la lectura de la declaración sumarial sólo debería servir para evidenciar dicha contradicción, y nunca para motivar una sentencia condenatoria; así el acta que da cuenta de la declaración previa del imputado no debe ser admitida como elemento de prueba para el juicio. Ello así, no porque su admisibilidad pueda generar una violación al derecho a no declarar en contra de uno mismo, sino porque se trata de prueba indebidamente perjudicial, que puede generar un prejuicio en el juzgador, mayor a su valor probatorio.

TOMA DE POSTURA:

Tal cual se ha podido apreciar de la observación de la realidad respecto a la actuación de las declaraciones previas del imputado durante el juicio oral sólo son consideradas con valor probatorio en tanto el fiscal las haya postulado como tal a fin de que se produzca su valoración, por lo mismo que se advierte un problema originado por esta concepción; es decir, resulta atribuible al fiscal la responsabilidad de la consideración de aquellas declaraciones para su actuación en juicio oral.

5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Analizar si la valoración de las declaraciones previas del imputado vulneran las garantías constitucionales”.

Habiendo llegado a comprender las bases doctrinarias que se desarrollan en función a los derechos fundamentales que se presume son garantizados por la estructura del derecho penal y su proceso tal cual se ha diseñado en el Código Procesal Penal actual, es prudente indicar que la ausencia de contemplación expresa en dicha regla de la forma en que se ha de considerar la declaración que se ha tomado al imputado durante la etapa previa al proceso penal, trae como consecuencia la directa vulneración del derecho a guardar silencio así como se estaría afectando también la prohibición de autoincriminación.

En base a ello se puede establecer que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, en tal sentido esta garantía constitucional, dignidad, adquiere especial importancia en cuanto al tratamiento que recibirá el imputado en un proceso penal, pues por más grave que sea la conducta ilícita

que se le imputa cometida, siempre está latente la prohibición de degradar la dignidad de tal individuo, pues la misma es inherente a la persona y nunca se pierde.

Es de vital importancia que la valoración inadecuada en tanto lectura de las declaraciones previas del imputado, hace caer la garantía del principio de presunción de inocencia, dentro del marco del debido proceso; puesto que dicho principio consiste en el derecho de toda persona acusada con la comisión de un delito, a ser considerada como inocente en tanto no se establezca legalmente su culpabilidad, a través de una sentencia definitiva, la cual se haya obtenido mediante un proceso en donde se hayan respetado las garantías constitucionales que revelan un respeto a un debido proceso, dentro del marco del Estado Social y Democrático de Derecho.

5.2. RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES

En lo que corresponde a esta variable se deben recoger las ideas que han surgido en mérito a la discusión sobre los objetivos que se enmarcan en cada una de ellas con la finalidad de verificar su validez y poder construir la hipótesis conclusiva la cual será comparada con la hipótesis que inicialmente se proyectó y así obtener como resultado la contrastación de esta, así tenemos el siguiente desarrollo:

5.2.1. Respecto a la Variable independiente: La oralización de las declaraciones previas del imputado en juicio oral.

Inicialmente debe dejarse clara la función de esta variable, afirmación que ha recibido la nominación de Independiente dada la ubicación dentro de la problemática como la causa que origina el cuestionamiento que señala el problema que generó la investigación, dicho de otro modo, se verificará si existen justificaciones que hagan presumir su validez como causa del problema.

Dada la construcción de esta variable ha de comprenderse que su finalidad es verificar si en el ámbito procesal que rige la investigación penal se constituyen las declaraciones del imputado que fueron tomadas en la etapa previa a la investigación, como un elemento probatorio valorado en el juicio oral; ello se ha podido corroborar como una circunstancia que se produce bajo la condición de que el fiscal las haya postulado como tal y de este modo sea usada en tanto el imputado haga uso de su derecho a guardar silencio con el fin de esclarecer la verdad; por lo mismo que, la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación:

La oralización de las declaraciones previas del imputado en juicio oral se produce en razón del acogimiento al derecho a guardar silencio y en tanto hayan sido postuladas por el fiscal.

5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: Las garantías constitucionales que inspiran el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.

Al igual que en el trabajo efectuado sobre la variable independiente como la causa del problema, es menester sobre ésta afirmación verificar su validez como efecto principal del problema, es decir, se determinará si existe realmente una afectación jurídica que respalde la investigación realizada.

Según lo recopilado, en la validación anterior es necesario identificar si en esta circunstancia especial se esta ejecutando la regla penal bajo los principios que orientan las garantías constitucionales del proceso penal, básicamente se aprecia un problema respecto al derecho a guardar silencio, lo cual trae como consecuencia lógica la vulneración del principio a la presunción de inocencia y desencadena la alteración del debido proceso penal; por lo mismo que la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación:

La vulneración del principio de presunción de inocencia como garantía constitucional altera el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva

5.3. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS

Para alcanzar la contrastación de la hipótesis se procederá a elaborar una hipótesis conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones resultantes de la validación de variables, resultado que será confrontado con la hipótesis inicial, operación que a continuación se desarrolla:

Hipótesis conclusiva:

La oralización de las declaraciones previas del imputado en juicio oral se produce en razón del acogimiento al derecho a guardar silencio y en tanto hayan sido postuladas por el fiscal; por lo tanto, al vulnerar el principio de presunción de inocencia como garantía constitucional alteran el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS	
HIPOTESIS INICIAL	HIPOTESIS CONCLUSIVA
Si, de alguna manera se evidencia que la lectura de la declaración previa se admite en juicio oral para su valoración; entonces, se	La oralización de las declaraciones previas del imputado en juicio oral se produce en razón del acogimiento al derecho a guardar

estará produciendo la vulneración de las garantías constitucionales por parte de los operadores jurídicos del nuevo sistema procesal penal.	silencio y en tanto hayan sido postuladas por el fiscal; por lo tanto, al vulnerar el principio de presunción de inocencia como garantía constitucional alteran el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.
---	--

Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido contrastada positivamente, pues la hipótesis conclusiva ratifica el planteamiento inicial, dando por sentado que efectivamente existe vulneración del debido proceso en razón del resquebrajamiento de la garantía que otorga el principio de presunción de inocencia al oralizar las declaraciones previas del imputado en tanto éste haya hecho uso de su derecho a guardar silencio.

CONCLUSIONES

PRIMERA:

Se puede concluir de acuerdo al desarrollo doctrinario sobre las declaraciones previas del imputado en las etapas del proceso penal, el hecho de que resulta imprescindible tener en cuenta que las etapas que se han marcado en el proceso penal peruano tienen la intención de delimitar acciones que permitan desarrollar la investigación de la manera más idónea, así en su formación se puede apreciar el respecto irrestricto de los derechos fundamentales que son el pilar del derecho penal garantista, estableciéndose el hecho de que las declaraciones previas se ubican en un momento previo a la investigación.

SEGUNDA:

Dada la ubicación previa de las declaraciones del imputado puesto que han sido tomadas en la etapa previa al proceso penal, cabe señalar que no tienen el mismo carácter de aquellas que son recabadas cuando el proceso en sí ya está oficialmente instaurado lo cual las incorpora en el marco de legalidad, así resulta jurídicamente válido opinar que, las declaraciones previas del investigado no tendrán el carácter de prueba.

TERCERA.

Se llega a determinar en razón de la observación del tratamiento de la actuación de las declaraciones previas del imputado durante el juicio oral, que sólo son consideradas con valor probatorio en tanto el fiscal las haya postulado para tal fin, con lo cual se le otorga el carácter probatorio a fin de que se produzca su valoración; por lo mismo que se advierte un problema originado por esta concepción; es decir, resulta atribuible al fiscal

la responsabilidad de la consideración de aquellas declaraciones para su actuación en juicio oral.

CUARTA:

Se ha logrado reconocer un hecho vulneratorio de derechos, puesto que habiendo llegado a comprender las bases doctrinarias que se desarrollan en función a los derechos fundamentales, que se presume son garantizados por la estructura del derecho penal y su proceso tal cual se ha diseñado en el Código Procesal Penal actual, es prudente indicar que la ausencia de contemplación expresa en dicha regla de la forma en que se ha de considerar la declaración que se ha tomado al imputado durante la etapa previa al proceso penal, trae como consecuencia la directa vulneración del derecho a guardar silencio así como se estaría afectando también la prohibición de autoincriminación, acciones que tienen como consecuencia la trasgresión del principio de presunción de inocencia y desde luego la afectación del debido proceso penal.

RECOMENDACIONES

PRIMERA

Se sugiere la celebración de un pleno jurisdiccional penal con la intención de ventilar la problemática evidenciada en esta investigación a fin de plasmar los mecanismos jurisdiccionales más idóneos con el fin de que la estructura procesal que incorpora los mecanismos para el desarrollo del juicio oral sean respetadas y evitar con ello la alteración del debido proceso en la investigación.

SEGUNDA

Se recomienda, ante la vulneración de derechos que se producen en razón de la oralización de las declaraciones previas en juicio oral, un cambio sobre el inciso 01, del artículo 376 del Código Procesal Penal, el cual debería quedar redactado de la siguiente manera: “Si el acusado se rehúsa a declarar total o parcialmente, el Juez le advertirá que aunque no declare el juicio continuará”.

BIBLIOGRAFÍA

- Angulo Arana, P. (2008). *El Interrogatorio de Testigos en el Nuevo Proceso Penal* (Segunda ed.). Lima, Perú: Gaceta Jurídica.
- Asencio Mellado, J. M. (2008). *La Prueba Prohibida y Prueba Preconstituida en el Proceso Penal*. Lima, Perú.
- Becerra Suarez, O. (2013). El Derecho a un Juez Imparcial. Obtenido de <http://blog.pucp.edu.pe/blog/orlandobecerra/2013/10/31/el-derecho-al-juez-imparcial/>
- Binder, A. (1993). *Introducción al Derecho Procesal Penal*. Buenos Aires, Argentina: Ad Hoc.
- Cafferata Nores, J. (2004). *Manual de Derecho Procesal Penal*. Córdoba, Argentina.
- Calamandrei, P. (1956). *Elogio de los Jueces Escrito por un Abogado*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Jurídicas Europa-América.
- Campos Aspajo, L., & Salas Pachas, R. K. (s.f.). *Campos Aspajo - Abogados y Consultores*. Obtenido de <http://camposaspajo.com/pb/garantia-de-la-no-autoincriminacion-analisis-de-su-contenido-en-la-legislacion-peruana-y-espanola.pdf>
- Capurso, M. P. (2004). *La Imparcialidad del Juzgador. Suplementos de Administración de Justicia y Reformas Judiciales*. Buenos Aires, Argentina.
- Eser, A. (1998). *Temas de Derecho Penal y Procesal Penal*. Lima, Perú: Idemsa.
- Ferrer, J. (2005). *Prueba y Verdad en el Derecho*. Madrid, España: Pons.

- Fontanet Maldonado, J. (2000). *Principios y Técnicas de la Práctica Forense*. Puerto Rico: Jurídica Editores.
- Foschini, G. (1956). *El Imputado*. Milano, Italia.
- González Jiménez, A. (2014). *Las Diligencias Policiales y su Valor Probatorio*. Bosh.
- Huertas Martín, M. (1999). *El Sujeto Pasivo del Proceso Penal como Objeto de Prueba*. Barcelona, España.
- López Barja de Quiroga, J. (2004). *El Derecho a Guardar Silencio y a No Incriminarse*.
- Montero Aroca, J. (1998). *Imparcialidad o Incompatibilidad. Sobre la Imparcialidad del Juez y la Incompatibilidad de Funciones Procesales*. Valencia, España: Tirant Lo Blanch.
- Montero Aroca, J. (1999). *Sobre la Imparcialidad del Juez y la Incompatibilidad de Funciones Procesales*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Montero Aroca, J. (2006). Derecho a la Imparcialidad Judicial. *Revista Europea de Derechos Fundamentales*(7).
- Monton Redondo, M. (1995). *Derecho Jurisdiccional* (Vol. III). Barcelona, España: Bosch.
- Neyra Flores, J. A. (2010). Garantías en el Nuevo Proceso Penal Peruano. *Revista de la Maestría en Derecho Procesal*, IV(1).
- Neyra Flores, J. A. (2010). *Manual del Nuevo Proceso Penal y Litigación Oral*. Lima, Perú: Idemsa.
- Nieva Penoll, J. (2010). *La Valoración de la Prueba*. Madrid.

- Ortells Ramos, M. (1997). *Proceso Penal Abreviado (Nuevo Estudio)*. Granada: Comares.
- Pérez-Cruz Martín, A. J. (2011). *El Interrogatorio del Acusado. Reflexiones a la Luz de la Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo*. Pamplona.
- Ramos Méndez, F. (2016). *Enjuiciamiento Criminal*. Barcelona, España: Atelier.
- Sagüés, N. P. (1993). *Elementos de Derecho Constitucional* (Vol. II). Buenos Aires, Argentina: Astrea.
- San Martín Castro, C. (2003). *Derecho Procesal Penal*. Lima, Perú.
- Sparza Leibar, I. (1995). *El Principio del Proceso Debido*. Barcelona, España: Bosch.
- Sucar, G. (2012). *Los Fundamentos Jurídicos del Derecho al Silencio*. Buenos Aires, Argentina: Universidad de Buenos Aires.

ANEXOS



1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

TESIS

**“LA VALORACION PROBATORIA DE LAS DECLARACIONES
PREVIAS DEL IMPUTADO FRENTE AL DERECHO A GUARDAR SILENCIO
EN JUICIO ORAL”**

CUESTIONARIO DE ENCUESTA

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la investigación académica que realizamos.

I. La oralización de las declaraciones previas del imputado en juicio oral.

1. La oralización de las declaraciones previas del imputado deben tomarse con la cautela suficiente a fin de que la valoración en el juicio oral que se realice sobre ellas no vulnere el derecho de defensa del imputado.

- a. De acuerdo

b. En desacuerdo

c. No opina.

2. La consecuencia directa del derecho a guardar silencio debe constituirse como el límite que impida la oralización de las declaraciones previas del imputado durante el juicio oral.

a. De acuerdo

b. En desacuerdo

c. No opina.

3. Considerar a las declaraciones previas como medios de prueba en el juicio y propender a su valoración sin que el Fiscal las haya postulado vulnera el debido proceso y el derecho de defensa del imputado.

a. De acuerdo

b. En desacuerdo

c. No opina.

II. Las garantías constitucionales que inspiran el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva.

4. El derecho penal tiene un corte garantista en razón que procura la protección de los derechos fundamentales de las partes, materializándose a través de la ejecución de los principios rigen el proceso penal.

- a. De acuerdo
- b. En desacuerdo
- c. No opina.

5. Las garantías constitucionales incorporan la protección de las partes a través de los principios como el debido proceso que reúne varios derechos fundamentales que aseguran una investigación acorde a ellos, incluyendo a la tutela jurisdiccional efectiva que asiste del derecho a la defensa del imputado a que se respete su derecho a guardar silencio.

- a. De acuerdo
- b. En desacuerdo
- c. No opina.

6. Ante la circunstancia que opera respecto a la oralización de la prueba debe establecerse la aplicación de los principios procesales para garantizar la tutela jurisdiccional efectiva como parte del debido proceso, por lo mismo que resulta incongruente la oralización de las declaraciones previas en juicio oral.

- a. De acuerdo
- b. En desacuerdo
- c. No opina.

